

# La violencia en Colombia en el marco del posacuerdo la Paz Total (2016-2024)

## *Violence in Colombia in the context of the post-agreement on Total Peace (2016-2024)*

Autores: Daniela Valentina Rincón Barrera, Juan José Reyes Martínez, Andrés Steven Bobadilla Silva, Juan Eduardo Ávila Moreno, Valentina Jaimes Bayona.

DOI: <https://doi.org/10.19053/uptc.16923936.v22.n44.2024.18890>

### **Para citar este artículo:**

Rincón Barrera, D., Reyes Martínez, J., Bobadilla Silva, A., Ávila Moreno J., Jaimes Bayona, V. La violencia en Colombia en el marco del posacuerdo la Paz Total (2016-2024). *Derecho y Realidad*, 22 (43), 33-71.



## LA VIOLENCIA EN COLOMBIA EN EL MARCO DEL POSACUERDO LA PAZ TOTAL (2016-2024)\*

*Violence in Colombia in the context of the post-agreement on Total Peace (2016-2024)*

**Grupo de Investigación en seguridad y Defensa –Gisde–**

Universidad Nacional de Colombia

Recepción: Octubre 7 de 2024

Aceptación: Noviembre 20 de 2024

### RESUMEN

El proyecto de investigación *Violencia y posguerra en el posacuerdo de paz, el fin de las guerras políticas: insurgencias, disidencias, resurgencias, neoparamilitares y bandas criminales*, desarrollado por el grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde) de la Universidad Nacional de Colombia, el cual se fija como propósito hacer una aproximación descriptiva y analítica de los conflictos en los territorios en que, con mayor intensidad, se viene expresando la violencia y el conflicto armado, haciendo un particular énfasis en las regiones fronterizas con Venezuela, en el Catatumbo y la Orinoquia colombiana (Arauca- Casanare),

en la región del pacífico colombiano que se extiende del Chocó a Tumaco, así como a las regiones del sur de Bolívar, el bajo Cauca y el nordeste antioqueño.

Este proyecto surge de la necesidad de identificar y caracterizar los actores que hacen presencia y ejercen control sobre estos territorios, sus particulares alianzas y confrontaciones y la manera como su presencia impacta la vida social, política y productiva de estas regiones, haciendo especial énfasis en los aspectos referentes a la violación de los derechos humanos y a los procesos de victimización.

---

\* Este trabajo de investigación contó con los aportes de los investigadores Daniela Valentina Rincón Barrera; Juan José Reyes Martínez, Andrés Steven Bobadilla Silva, Juan Eduardo Ávila Moreno, Valentina Jaimes Bayona.

## **PALABRAS CLAVES**

Conflicto armado; Paz Total; insurgencia; paramilitares; disidencia; resurgencias; víctimas.

## **ABSTRACT**

The research project Violence and postwar in the post-peace agreement, the end of political wars: insurgencies, dissidents, resurgences, neoparamilitaries and criminal gangs, developed by the Security and Defense Research Group (Gisde) of the National University of Colombia, whose purpose is to make a descriptive and analytical approach to the conflicts in the territories in which violence and armed conflict are expressed with greater intensity, placing particular emphasis on the regions border with Venezuela, in Catatumbo and the Colombian Orinoquia (Arauca-Casanare), in the Colombian Pacific region that extends from Choco to Tumaco, as well as the southern regions of Bolívar, lower Cauca and northeast Antioquia. This project arises from the need to identify and characterize the actors that are present and exercise control over these territories, their alliances and confrontations and the way in which their presence impacts the social, political and productive life of these regions, placing special emphasis on the aspects related to the violation of human rights and the processes of victimization.

## **KEYWORDS**

Armed conflict; Total Peace; insurgency; paramilitaries; dissidence; resurgences; victims.

## **PRESENTACIÓN**

Este artículo se propone presentar una descripción breve de la transformación de los fenómenos de la guerra y la violencia, a partir de la firma del acuerdo de paz con las Farc-EP en el año 2016, en cinco zonas del país: la región del Catatumbo y la Orinoquia que comprende Santander, Casanare, Arauca; la región del Chocó, que comprende Córdoba y el Urabá Antioqueño; el suroccidente del

país que integra a Tumaco, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo; la región de la Costa Atlántica que comprende a Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar y La Guajira; y una última zona, en la parte central del país, con el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Sur de Bolívar y Antioquia.

A la hora de abordar estas cinco zonas del país se tuvo presente el análisis de tres aspectos fundamentales: la identificación y caracterización de los actores de la violencia que hacen presencia en estos territorios (ELN, disidencias de las Farc, segunda Marquetalia, Clan del Golfo, Caparros, entre otros); las dinámicas que están enmarcadas en el territorio en materia de violencia, economías (legales e ilegales), políticas implementadas en el marco del posacuerdo de la firma de paz del año 2016 y, los repertorios de violencias que se ejercen en el territorio como son: asesinatos, reclutamientos forzados, minería ilegal, cultivo y procesamiento de la coca, entre otras actividades ilegales.

Estos tres aspectos fueron cruzados con dos componentes fundamentales: el ambiental, que explicita la forma como la violencia en el país ha generado una huella negativa en el ambiente, produciendo consecuencias significativas entre las que se encuentran la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la desertización del territorio, la transformación de los ecosistemas y nichos ecológicos, entre otros. El segundo componente es el impacto de género que ha producido el conflicto armado hacia las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con una orientación sexual homosexual, binaria, no binaria, entre otras opciones que son consideradas las personas más vulnerables en medio del conflicto armado.

La investigación nutre sus análisis de los referentes conceptuales, los cuales han sido desarrollados por el grupo de investigación en la caracterización de la insurgencia, las resurgencias, las disidencias y el crimen organizado nacional y transnacional, en sus distintas manifestaciones como grupos armados organizados y grupos armados

residuales. En este artículo, en particular, centrará esta reflexión en la caracterización de los territorios más azotados por la violencia, en el periodo comprendido entre los años 2016 y 2024, sin renunciar a la búsqueda de explicaciones que se remontan a tiempos anteriores.

### **Región del Catatumbo y la Orinoquía: Santander, Casanare, Arauca<sup>1</sup>**

La región nororiental fronteriza de Colombia, que abarca tanto la región del Catatumbo como la Orinoquía colombiana, está conformada por los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Casanare; dicha región ha sido afectada especialmente por décadas de conflicto armado. También ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, incluyendo guerrillas, paramilitares y bandas criminales, así como la presencia de fuerzas militares y de seguridad del Estado.

En la *región del Catatumbo*, operan varios grupos armados ilegales que han tenido una incidencia significativa en el territorio, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera bajo la jurisdicción del Frente de Guerra Nororiental Manuel Vásquez Castaño, con estructuras como el Frente Camilo Torres Restrepo y el Frente Carlos Armando Cagua Guerrero, que tienen un fuerte apoyo y soporte del Frente Domingo Laín Sáenz, el cual se ha proyectado desde Arauca, su lugar de origen, hacia la región del Catatumbo.

Este grupo guerrillero tiene una presencia consolidada en municipios como Tibú, Teorama y San Calixto. Aquí el ELN ha sido responsable de acciones armadas, incluyendo ataques a la infraestructura energética y vial, así como enfrentamientos con la fuerza pública. Su accionar ha generado desplazamientos forzados y otras afectaciones humanitarias en la región. Igualmente hacen presencia reductos

del Ejército Popular de Liberación (EPL), conocidos en el territorio como los Pelusos, quienes mantienen influencia en municipios como Hacarí, San Calixto y La Playa. Ellos han estado involucrados en enfrentamientos con el ELN y la fuerza pública, contribuyendo a la inestabilidad y violencia en la zona, aunque se encuentra relativamente diezmado y descompuesto.

También operan en la región del Catatumbo las disidencias de las Farc y, en particular, algunas facciones que no se acogieron al proceso de paz y continúan operando en el Catatumbo. Estas disidencias tienen presencia en municipios como Tibú, Convención, El Tarra y Sardinata, y están involucradas en actividades relacionadas con el narcotráfico y otras economías ilegales. Igualmente, operan en la región estructuras de las resurgencias de las Farc, *Segunda Marquetalia*, que actualmente están en guerra y disputa por el territorio y sus economías ilegales.

Además, se encuentran los Grupos Armados Organizados (GAO): Bandas criminales como Los Rastrojos y el Clan del Golfo (AGC), especialmente en áreas fronterizas y zonas estratégicas para el narcotráfico. Estos grupos están involucrados en actividades ilícitas como el contrabando, la extorsión y el control de rutas de narcotráfico.

En las últimas décadas, la región del Catatumbo ha visto instalarse y desarrollarse a las economías ligadas a la producción de hoja de coca y al desarrollo del narcotráfico, dada la cercanía del territorio a la frontera venezolana, con todas las implicaciones que tiene esa doble condición para la zona, como el que se desarrollen múltiples actividades ilegales y ser un centro de producción y un corredor del narcotráfico disputado por distintos grupos armados ilegales.

La presencia y las acciones de estos grupos han tenido múltiples impactos en el Catatumbo, en materia de violación de derechos humanos. Por ejemplo, los enfrentamientos entre estos grupos armados y la fuerza pública han generado

1. Este aparte fue trabajado por Andrés Steven Bobadilla Silva y Valentina Jaimes Bayona, Miembros del Semillero de investigación del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde) de la Universidad Nacional de Colombia, como un ejercicio de formación.

desplazamientos masivos e individuales de la población civil, afectando su seguridad y bienestar. También se han registrado casos de homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y violencia sexual. Así mismo, la extorsión y el control de las economías ilegales, han impactado negativamente las actividades económicas lícitas, limitando el desarrollo regional.

En distintas regiones del territorio del Catatumbo, la presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados ha restringido la movilidad de las comunidades y el acceso a servicios básicos, como educación y salud. De esta manera, la compleja interacción entre estos actores armados ilegales y su incidencia en el Catatumbo ha perpetuado un ciclo de violencia y afectaciones humanitarias, las cuales continúan desafiando los esfuerzos de paz y desarrollo en la región.

En estos dos casos, el conflicto armado ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico y social de la región. Las comunidades se han visto afectadas en su capacidad para llevar a cabo actividades económicas como la agricultura y el turismo, debido a la inseguridad y el temor generado por la presencia de estos grupos armados ilegales. A ello se suma la falta de presencia del Estado y la ausencia de políticas públicas adecuadas para atender las necesidades de las comunidades, lo que ha agravado la situación en estas zonas (Bobadilla & Jaimes, 2023)

En el *departamento de Arauca*, ubicado en la frontera oriental de Colombia, operan principalmente dos grupos armados ilegales: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Ambos han mantenido una presencia histórica en la región, influenciando significativamente la dinámica territorial y la vida de las comunidades locales.

Arauca, en particular, ha sido considerado como uno de los departamentos más

afectados por el conflicto armado en el país. A lo largo de los años, las comunidades han sido víctimas de violencia, desplazamiento forzado, desaparición forzada, masacres y secuestros. Asimismo, la región ha sufrido daños ambientales significativos, como la contaminación del río Arauca, debido a los atentados a los oleoductos y los derrames de petróleo.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha consolidado una fuerte presencia en Arauca, especialmente en municipios como Tame, Saravena, Arauquita y Fortul. Este grupo ejerce control sobre diversas actividades económicas, incluyendo la extorsión a la industria petrolera y el contrabando, aprovechando la proximidad con la frontera venezolana. Su influencia se extiende a la vida cotidiana de las comunidades, imponiendo restricciones a la movilidad y afectando la economía local, a ello se suma que mantiene un cerrado control sobre las administraciones municipales y las empresas de contratistas en el departamento.

Por otro lado, y una vez desmovilizadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a principios de 2017, el ELN emprendió un proceso de expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Así las cosas, además de llenar los vacíos territoriales dejados por las Farc, el ELN aumentó su participación en las economías criminales en Colombia y Venezuela, donde el ascenso al poder de Nicolás Maduro en 2013 impulsó aún más la presencia de la guerrilla en ese país.

El ELN opera como una guerrilla binacional. En Colombia sigue enfocado en tomar territorio, enfrentándose con la fuerza pública y construyendo bases políticas, todo en nombre de su revolución. Pero en Venezuela, sus simpatías ideológicas y alianzas estratégicas con el Gobierno chavista lo llevaron a funcionar como un grupo “paramilitar”, coordinando operativos con las fuerzas de seguridad, interfiriendo en eventos electorales y ayudando al Gobierno a controlar zonas claves.

El Frente de Guerra Oriental Manuel Vázquez Castaño del ELN, a través del Frente Domingo Laín, ha tenido una presencia histórica en las regiones de Boyacá, Casanare, Arauca y Santander. Esta zona es de gran importancia para el ELN, porque le permite moverse y operar en diferentes regiones del país (Indepaz, 2021). El poder se basó en el sistema de "gobernanza anidada" que estableció en la zona de Arauca, para ello y durante las décadas de 1980 y 1990, esta agrupación actuó como intermediario y representante de las demandas sociales ante los gobiernos municipales, el departamento y las empresas petroleras (Larratt-Smith, 2015).

Este grupo también ha logrado permear buena parte de la sociedad araucana, contando con simpatías en organizaciones sociales, Juntas de Acción Comunal e incluso en las administraciones públicas, convirtiéndose en un Estado paralelo en la región.

De otro lado, la región del Sarare, en inmediaciones de Saravena y el pie de monte de la cordillera oriental, es la zona con mayor presencia del ELN, pues allí los procesos de colonización campesina, en la década de los años 70, estuvieron fuertemente ligados al surgimiento de esa guerrilla, debido a los incumplimientos por parte del Gobierno de los acuerdos con la población y la dura represión contra la dirigencia de paros cívicos del Sarare, realizados en esa época.

Tras la firma del acuerdo de paz en el año 2016, surgieron facciones disidentes de las Farc, quienes rechazaron el proceso de desmovilización. Estas disidencias establecieron presencia en Arauca, compitiendo con el ELN por el control territorial y desarrollando actividades ilícitas. Además, la confrontación entre ambos grupos intensificó la violencia en la región, generando desplazamientos forzosos, asesinatos selectivos, una creciente inseguridad para la población civil y una profunda ofensiva contra las organizaciones sociales del departamento, resultante de la confrontación entre Frente de Guerra

Nororiental del ELN y las disidencias que conduce Antonio Medina.

La presencia y las acciones de estos grupos armados han tenido consecuencias profundas en Arauca, como la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc, las cuales han incrementado los índices de homicidios en el departamento.

En lo corrido de 2024, se han registrado más de 100 asesinatos atribuidos a estos actores armados. Además, los enfrentamientos y las amenazas han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, buscando seguridad en otras regiones o incluso cruzando la frontera hacia Venezuela. Esta situación ha generado crisis humanitarias y ha sobrecargado la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Las imposiciones de los grupos armados han afectado la economía local, especialmente en sectores como la agricultura y la ganadería. Las restricciones a la movilidad y las extorsiones han dificultado la comercialización de productos, impactando negativamente los medios de vida de las comunidades. A su vez, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han sido blanco de amenazas y asesinatos, con lo cual se busca silenciar voces críticas y desarticular la organización social en la región. Esta situación ha debilitado el tejido social y ha generado un clima de miedo e incertidumbre.

En términos generales, la compleja situación en Arauca refleja la necesidad de intervenciones integrales que aborden tanto la seguridad como el desarrollo social y económico, con el fin de mitigar el impacto de los actores armados y promover la paz en la región.

En el *departamento de Casanare*, varios grupos armados ilegales ejercen influencia significativa, afectando tanto el territorio como a sus habitantes. En este departamento hace presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien, a través de su Frente José David Suárez, mantiene presencia en

la región. Este grupo ha sido señalado por ejercer presiones sobre la población civil, incluyendo liderazgos sociales, y por reclutar a niñas, niños y adolescentes. Además, ha llevado a cabo acciones criminales contra las fuerzas de seguridad del Estado y sus instalaciones en los cascos urbanos de Aguazul y Yopal.

También hacen presencia las Disidencias de las Farc, particularmente los Frentes 10 y 28 del Estado Mayor Central (EMC), quienes han incrementado su actividad en el departamento después de la firma del Acuerdo de paz del año 2016. Estos frentes buscan consolidar su control territorial mediante acciones armadas, presionando a las comunidades y recaudando finanzas para su reconfiguración y posicionamiento regional.

También se tiene conocimiento de la presencia de estructuras del Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC), que han expandido su influencia en Casanare, eliminando y replegando pequeñas estructuras de antiguas organizaciones paramilitares, las cuales mantenían control local. Su accionar violento busca alcanzar supremacía ante oponentes y enemigos, controlando el sur del departamento y obteniendo ingresos derivados de la dinámica económica del territorio.

La presencia y actividades de estos grupos armados ilegales han generado múltiples afectaciones a la población y al desarrollo territorial. Las distintas disputas territoriales, entre los diferentes grupos armados en el territorio, han obligado a comunidades enteras a abandonar sus hogares en busca de seguridad; además que han generado el fenómeno de reclutamiento de niñas, niños y jóvenes en poblaciones especialmente vulnerables a quienes engañan con promesas de mejores oportunidades que el Estado no les ha brindado.

En esta región, en el posacuerdo, se han reportado casos de violencia sexual y homicidios selectivos dirigidos contra líderes sociales, firmantes de paz y otros miembros

de la comunidad. Esto porque los grupos armados imponen "normas de conducta" y limitan la libre movilidad de los habitantes, generando temor e intimidación.

También, es particularmente notable la afectación a las comunidades indígenas que habitan el territorio; además, diez pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo están en peligro debido a la consolidación territorial de las disidencias de las Farc, lo que vulnera sus derechos fundamentales y amenaza su subsistencia. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas para advertir sobre estos riesgos y ha instado a las autoridades a implementar medidas de protección y prevención en las comunidades afectadas en este sentido.

## **ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES**

Entre los años 2016 y 2024, la *región del Catatumbo*, en Norte de Santander, ha experimentado una persistente y compleja situación de conflicto armado que ha afectado gravemente a la población civil. Ahora, a pesar del Acuerdo de Paz firmado en el año 2016 con las Farc, la presencia y reconfiguración de otros grupos armados, como el ELN, el EPL y las disidencias de las Farc, han mantenido altos niveles de violencia en la zona.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), entre enero y septiembre de 2023 se registraron 47 acciones armadas que provocaron el desplazamiento masivo de 1.470 personas en la subregión del Catatumbo. Además, los desplazamientos individuales afectaron a un total de 4.330 personas en el mismo período.

Durante 2023, la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (Uariv), identificó en los municipios de San Calixto, Hacarí, Teorama, La Playa, El Carmen, El Tarra y Tibú un total de 334 amenazas dirigidas a la población civil, impactando especialmente a líderes y lideresas sociales. Estas amenazas han debilitado procesos

organizativos y han generado terror entre la población. La Defensoría del Pueblo, en sus alertas tempranas, ha informado sobre los riesgos inminentes que enfrentan niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados no estatales.

Se estima que al menos 150 menores podrían verse afectados por este hecho. Además, los casos de violencia basada en género (VBG) han aumentado significativamente en las zonas rurales y urbanas de la región, y las víctimas enfrentan brechas y barreras al momento de acceder a la ruta de atención integral.

También, la llegada masiva y continua de población migrante, proveniente de Venezuela, ha generado nuevas dinámicas de doble afectación. Estas personas, en su mayoría en situación de vulnerabilidad, han sido objeto de abusos por parte de grupos armados y enfrentan barreras de acceso a derechos, debido a su estatus migratorio irregular.

En el período comprendido entre los años 2016 y 2024, la región del Catatumbo ha estado marcada por desplazamientos forzados, amenazas, homicidios selectivos, reclutamiento forzado de menores y violencia sexual, afectando tanto a la población local como a migrantes venezolanos que buscan refugio allí.

Desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016, el *departamento de Arauca* ha sido uno de los lugares más afectados por el aumento de la violencia contra líderes sociales en Colombia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 1 de enero del año 2016 y el 28 de febrero de 2022, se han registrado 125 asesinatos de líderes y lideresas sociales en este departamento. De igual forma, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido 22 alertas en relación con la violencia contra líderes sociales en Arauca, lo que indica que la situación es particularmente grave en este territorio (Indepaz, 2022).

Los líderes y lideresas sociales en Arauca se enfrentan a múltiples formas de violencia, que incluyen amenazas, desapariciones, homicidios, ataques y desplazamientos forzados. Según el Informe Anual de la Fundación Paz y Reconciliación, sólo en 2020 se registraron 21 asesinatos de líderes sociales en el departamento, lo que representó un aumento del 23 % en comparación con el año anterior (Fundación Pares, 2020).

Entre las posibles explicaciones de este aumento de la violencia en Arauca, se encuentran el enfrentamiento permanente de los grupos armados ilegales ELN y las disidencias de las Farc, en la disputa por el control de territorios y recursos naturales, lo que se agudiza con las relaciones de convivencia de las fuerzas militares con estos grupos, según sus necesidades en el conflicto y la falta de una presencia efectiva del Estado en zonas periféricas del departamento. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación de violencia contra líderes y lideresas sociales en Colombia se agrava por la ausencia de medidas de prevención, investigación y sanción efectivas, lo que genera impunidad y perpetúa la violencia.

Entre los años 2016 y 2024, el departamento de Casanare ha registrado diversas formas de victimización derivadas del conflicto armado en Colombia. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), hasta el 31 de julio de 2024 se reconocieron 9.826.986 víctimas del conflicto armado en todo el país.

En Casanare, numerosas familias han sido obligadas a abandonar sus hogares, debido a la violencia ejercida por grupos armados ilegales. Se han registrado asesinatos selectivos y masacres que han afectado a comunidades enteras. También la desaparición de personas, por parte de actores armados, ha sido una constante preocupación en la región. Asimismo, grupos ilegales han involucrado a niños, niñas y adolescentes en actividades armadas; se han documentado casos de violencia sexual en el marco del conflicto, y líderes sociales y

comunitarios han sido objeto de amenazas, lo que ha generado desplazamientos dentro de las mismas ciudades.

En 2014 se reportaron alrededor de 27.000 víctimas en Casanare, concentrándose principalmente en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Orocué. Para 2017, el departamento contaba con una población de 368.989 habitantes, de los cuales 60.267 estaban registradas como víctimas del conflicto armado. Es importante destacar que, aunque se han implementado planes de acción territorial para la asistencia y reparación integral de las víctimas, la persistencia de grupos armados ilegales y la presencia de economías ilícitas, continúan generando riesgos para la población civil en Casanare. La atención a las víctimas y la implementación de políticas públicas efectivas siguen siendo desafíos fundamentales para garantizar la reparación y la no repetición de estos hechos en el departamento de Casanare.

## **LA REGIÓN DEL CHOCÓ: CÓRDOBA Y EL URABÁ ANTIOQUEÑO**

Las regiones de Antioquia, Córdoba y el Urabá chocoano se han visto afectadas por el conflicto armado y la violencia desde hace varias décadas, con diversos actores armados operando en la zona. Estos actores incluyen las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), grupos que están involucrados en el tráfico de drogas, secuestros y extorsiones, entre otras actividades ilegales, (Análisis Urbano, 2022) en el norte de Antioquia y en el centro del departamento.

Esta organización (las Farc), ha desarrollado alianzas temporales con el ELN en el Norte, donde el enemigo común es el Clan del Golfo, pero las alianzas son cambiantes e irregulares y, en lo esencial, dependen de los intereses de cada grupo. El ELN continúa operando en la región, en medio de las accidentadas conversaciones de paz con el Gobierno colombiano, teniendo presencia en el centro, norte, y oeste del departamento. Ahora, además de los

grupos mencionados, existen otros grupos armados ilegales que operan en la región, incluyendo facciones disidentes de las Farc y otras organizaciones criminales, como Los Rastrojos, que eran parte de las AGC hasta el 2017 (Análisis Urbano, 2022).

La presencia de estos actores armados en esta región del país ha provocado violencia y desplazamiento generalizado con civiles, a menudo atrapados en el fuego cruzado. El Gobierno colombiano ha tomado medidas para abordar la situación, incluidas las negociaciones de paz con el ELN, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, El clan del golfo y otros grupos ilegales que operan en los departamentos de Antioquia, Córdoba y el Urabá chocoano.

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) conocidas como Clan del Golfo, son un grupo paramilitar que surgió de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006. El grupo está vinculado con el tráfico de drogas, minería ilegal y extorsión, entre otras actividades ilegales y ejercen una presencia marcada en el Urabá antioqueño y chocoano, territorios que constituye su base de operaciones principal.

Cabe anotar que el Urabá antioqueño es una de las zonas económicas más lucrativas para el Cartel del Golfo, porque controla casi en su totalidad este territorio, las únicas zonas en disputa son los municipios Vigía del Fuerte y Murindó, colindantes con el departamento del Chocó. Las estructuras criminales que se encuentran allí en confrontación y guerra permanente son el Clan del Golfo y el ELN, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez y el Frente de Guerra Cimarrones.

En la región de Murindó tienen presencia el Clan del golfo (S. Occidente Antioqueño) y ELN (Frente de Guerra Occidental). En el norte del Urabá antioqueño se destacan tres estructuras del Clan del Golfo, la primera es la estructura Carlos Vásquez, que está a cargo de los municipios: Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartado y comparte Turbo con la subestructura Gabriel Poveda Ramos, la

cual tiene presencia en San Pedro de Urabá, Arboletes, Necoclí y San Juan de Urabá (Análisis Urbano, 2022).

Esta subregión de Antioquia es una zona de importancia económica para el Clan del Golfo, en la medida que es un puerto para la salida de drogas y contrabando hacia el Caribe, de ahí su presencia casi hegemónica en el lugar. Así mismo, las zonas más disputadas entre el Clan del Golfo y el ELN en esta subregión comprometen los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó.

En el departamento de Córdoba, en la región del alto Sinú, que alguna vez fue un bastión de los frentes 5, 18 y 58 de las Farc, ahora está El Clan del Golfo, que ha intentado tomar el área. A este grupo se sumaron excombatientes y algunos ex comandantes de las Farc, quienes no terminaron en el proceso de paz en la región y hoy serían los cabecillas de estructuras armadas que pretenden controlar militar y socialmente el estratégico corredor que va desde los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano (Verdad Abierta, 2018).

Esta situación no es nueva, el informe de Riesgo 037-16 del 23 de noviembre de 2016, llama la atención de las autoridades civiles y de Policía sobre la expansión del Clan del Golfo y el peligro que ello representaba para líderes sociales, dirigentes indígenas, integrantes de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) (Indepaz, 2016). Según este informe, el Clan del golfo controla esta vasta zona con un objetivo de acaparar los ingresos de actividades económicas ilícitas como la extorsión y el pequeño comercio, así como toda la cadena productiva del narcotráfico.

La ampliación de la presencia del Clan del Golfo en el Alto Sinú se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la aplicación del acuerdo de paz en la región con la guerrilla de las Farc.

Por otro lado, los avances entre los años 2016 y 2018 pararon en cuanto el Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocido como Caparrapos, una disidencia de las AGC

desde el 2017 y el autodenominado Nuevo frente 18 (Román Ruiz) Cacique Coyará de las Farc-EP, porque se convirtieron en la primera estructura en unirse a la propuesta de refundar las antiguas Farc por parte de la Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez".

El origen del frente 18 de estas resurgencias de las Farc tiene origen en abril del 2018, ese mes salió a la luz un video en el que Alias "Ramiro", un antiguo miembro del Frente 36, salía de dicho frente para crear el Frente 18, recordando la necesidad de una nueva fuerza guerrillera que contrarrestara la creciente amenaza paramilitar que, según él, se desarrollaba en esa región del país. Desde entonces, y con al menos 120 hombres dentro de sus filas, el Frente 18 ha logrado controlar los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y San José de Uré en el departamento de Córdoba, donde también hacen presencia otros grupos ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Caparrapos (Insight Crime, 2019).

En la región del río San Jorge, en la parte sur de Córdoba y en límites con el *bajo Cauca* antioqueño, se cuenta con presencia marcada de Grupos Armados Organizados que restringen la movilidad de los pobladores y afectan gravemente sus medios de vida. Son estructuras como el "Clan del Golfo" y "Caparrapos", y las nuevas disidencias adscritas al 58 frente de las Farc-EP, las que se apoderaron de las zonas dejadas por las desaparecidas Farc. Se habla de vínculos entre estos grupos y el cártel mexicano de Sinaloa, quien financia a los miembros de estas organizaciones. El enfrentamiento entre los citados grupos armados durante el último año lo evidencia la alerta temprana No 005-183 emitida para Tierralta (Verdad abierta, 2018).

En el Darién chocoano, resulta una situación similar a la del Urabá antioqueño, pero más al norte, el clan del golfo es más poderoso, en el sur empiezan a tener dificultades con el ELN, en una guerra que involucra y afecta gravemente a la población. Esta confrontación la desarrolla el ELN con el bloque occidental de guerra y el bloque sur occidental de guerra.

Los dos grupos armados se beneficiaron de la desmovilización de las Farc. La región del Darién es inhóspita y gracias a esto la región es perfecta para el contrabando, el narcotráfico, así como la minería ilegal, la migración ilegal y la explotación de personas, donde el Clan del Golfo tiene el monopolio de estas dos últimas actividades.

Los grupos criminales organizados utilizan la región para transportar cocaína, marihuana y otras drogas ilegales a través de la selva y los ríos que atraviesan la zona. Además, el Darién es una de las principales rutas usadas por los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos desde Sudamérica. Estos inmigrantes ilegales, a menudo, atraviesan la región caminando y muchos se enfrentan a peligros como la violencia, la extorsión y la explotación por parte de los traficantes de personas y los grupos criminales (Insight Crime, 2022). Para octubre de 2022, más de 200.000 personas habrían cruzado el tapón del Darién, que se ha convertido en un importante punto de tránsito para el transporte de drogas y personas hacia Centroamérica y México.

La fuerza pública de Colombia, al respecto, ha realizado diversas intervenciones en la región del Darién, para combatir actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y la presencia de grupos armados ilegales. Uno de los operativos más conocidos fue el llamado "Operación Darién", contra la trata de personas realizado en 2018, llevado a cabo por el regimiento número 54 de la Séptima División.

Además de estas operaciones, se han llegado a acuerdos con Panamá, para vigilar la migración irregular por esta zona (2023), la cual contó con la construcción de una nueva base militar en el corregimiento de Sapzurro, en Chocó. En esta parte del Urabá chocoano, la séptima división del ejército nacional, en jurisdicción de la cuarta brigada, tiene entre 5000 a 7.000 hombres de los 26.000 que tiene la Séptima División (Revista Ejército, 2020) y tiene la tarea de resguardar la zona del Chocó, Darién y parte del Urabá antioqueño, junto a la Marina y la

guardia costera, para así tratar de prevenir los combates, proteger a las comunidades y poner fin a las economías ilegales que financia a todos los grupos de la región.

Sumado a ello, se encuentra que el Gobierno y la fuerza pública colombianos han implementado varias estrategias en la región a lo largo de los años, para combatir estos problemas y mantener el control sobre el área.

A su vez, las Fuerzas Armadas de Colombia son responsables de mantener la seguridad y combatir los grupos armados ilegales en esta región y esto es llevado por el regimiento número 17 de la Séptima División, la misión de estos es incautar, lo que se pueda a los grupos armados ilegales: desde kilos de cocaína, hasta artefactos explosivos; sin embargo, lo más importante y lo que caracteriza a esta región es tratar de controlar el máximo territorio posible, para que estos grupos armados ilegales dejen de asolar la población, debido a que esta subregión está dividida entre, disidencias y resurgencias de las Farc, ELN, El clan del golfo y los Caparrapos (Ministerio de defensa, 2021)

Tal vez la operación más grande que se ha desarrollado sobre esta región la constituye Agamenón, que fue lanzada oficialmente el 2 de febrero de 2015, durante el mandato de Juan Manuel Santos. Inicialmente estaba al mando de cuatro generales de las direcciones especializadas de la Policía: Antinarcóticos, Investigación Criminal, Inteligencia y Carabineros, quienes tenían el centro de comando en la base antinarcóticos de Necoclí.

Los encargados de ejecutar esta operación, según información del Ministerio de Defensa, eran 1.200 policías expertos en la lucha contra la mafia, en equipo con fiscales especializados de Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bogotá, quienes contaban con el apoyo de las principales agencias de seguridad mundial, como la CIA, DEA, FBI, Interpol, Europol y las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido, las cuales aportaron dinero, tecnología y capacitación.

La misión era capturar a los cabecillas del Clan del Golfo y dismantelar a todo el cartel, incluyendo la supresión de su aparato financiero, militar, logístico y de corrupción. El foco de la intervención se concentró en Antioquia, Córdoba y Chocó, pero desde allí se desplegó a todos los rincones del país en los que hubiera tentáculos del grupo ilegal.

Agamenón se convirtió en una operación de persistencia, buscando asfixiar con ataques, allanamientos y capturas constantes al Clan del Golfo. También incluía un modelo de intervención social, con jornadas de recreación, veterinaria, carrotaques de agua potable y otros servicios, con los que se pretendía disminuir el abandono estatal en los sitios más pobres de Urabá y, de paso, reducir el control social de los grupos ilegales sobre la población. Durante sus seis años de actividades, sirvió para neutralizar a dos generaciones del Estado Mayor (la cúpula) del cartel, dando de baja a cabecillas tan peligrosos como “Marcos Gavilán”, “Guagua”, “Indio Arístides”, “Pablito”, “Inglaterra” y “Marihuano”.

Además, se convirtió en el modelo para el diseño de otras operaciones contra diferentes grupos armados en regiones conflictivas, como Esparta (Catatumbo), Atenea (Llanos Orientales), Aquiles (Bajo Cauca), Hércules (Nariño) y Escudo Darién (Chocó).

A 2021, el balance oficial fue de 4.062 capturas (3.224 miembros del Clan y 838 de otros grupos) y la baja de 147 integrantes. Además, se incautaron 403 toneladas de cocaína y 1.188 armas; se decomisaron \$31.479.993.117 en efectivo, y se realizó el decomiso de 2.194 bienes valuados en \$973.668.850.000 y la destrucción de 125 laboratorios de droga. El esfuerzo incluyó la muerte de al menos 100 policías. Algunos de los cuales cayeron en el fuego cruzado de los combates, otros pisaron campos minados o fueron víctimas de “planes pistola”, y 17 más perecieron en un accidente de helicóptero Black Hawk en Carepa (2015).

Con el pasar de los años, se han introducido varias reformas: se pasó a llamar Agamenón II, luego Agamenón II

Plus y finalmente Campaña Policial y Militar Agamenón, cuando el presidente Iván Duque ordenó que el Ejército se sumara a la estrategia. Aun así, la operación no logró el dismantelamiento del Clan y con el tiempo empezó a perder recursos.

De los cuatro generales se pasó a uno solo, y los 1.200 hombres se redujeron a 500; también se mermó el presupuesto, se suprimieron las intervenciones comunitarias y, finalmente, se destiñó el interés político, pues a partir de 2018 la Fuerza Pública se concentró en atacar el nuevo fenómeno criminal que amenazaba la seguridad nacional: *las disidencias de las Farc*.

El entierro de Agamenón ocurrió, paradójicamente, en el momento cumbre de la persecución contra el Clan del Golfo: la captura de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el 23 de octubre de 2021 en Urabá. Durante el Gobierno del presidente Duque la operación Agamenón se renombró con el nombre de Operación Cóndor, pero esta se extinguió lentamente con el cambio de gobierno y la instalación de la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro en 2022, al igual que con el relevo de los altos mandos militares y policiales que venían luchando contra el Clan. Tres años después de su penoso entierro, Agamenón revivió con el mismo propósito de frenar al cartel, que hoy tiene redes en 24 departamentos y unos 4.000 hombres en armas (El Colombiano, 2024).

Desde la operación Agamenón, la cual centró sus esfuerzos en el debilitamiento de la estructura del Clan del Golfo, desde su cuartel de operaciones en el fuerte en Carepa, Antioquia, en donde se crearon varias ‘burbujas’ de inteligencia, conformadas por máximo tres personas que empezaron a analizar toda la información proveniente del Urabá antioqueño, Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.

Esos grupos de la Policía empezaron a conocer en detalle los movimientos de los jefes del ‘Clan’, sus gustos, enfermedades, debilidades y delitos; con esta operación se logró la captura de Harlinson Úsuga, alias

Orejas, señalado de manejar las finanzas de la organización y quien en marzo del 2021 se llevó a Estados Unidos los secretos más valiosos de la organización relacionados con las caletas de dinero y las empresas fachada de la red para lavar su dinero. Con esto se habían realizado 3.300 operaciones de extinción de dominio contra la red criminal (El Tiempo, 2021).

Otros lugartenientes que caen en esta zona son Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, en septiembre del 2017, quien hizo que Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel" pensara en someterse a la justicia por un tiempo y acogerse a la JEP, pero estas conversaciones no prosperaron (El Espectador, 2017).

Además de las operaciones en contra de las finanzas y lugartenientes del Clan del Golfo, la operación Agamenón se centró en la búsqueda del ex líder Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", el cual al verse asediado debido a las capturas de figuras clave de su organización, dejó de moverse de departamento en departamento, pues antes iba a Chocó, Antioquia y Córdoba, para vigilar personalmente su negocio; ante el riesgo de recorrer tales distancias y según la inteligencia de la Operación Agamenón, este se queda entre Necoclí y Turbo, donde dispuso unos 8 anillos de seguridad en la región. Así el ejército pudo centrarse más en su captura. Lamentablemente, con la caída de "Otoniel" no termina con el Clan del Golfo y solo se abre otro capítulo, entonces, luego de la captura, los grupos de búsqueda volvieron a trabajar para el hacer el perfilamiento de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, quien es el sucesor.

Para el 2023, este hombre se quiere someter con el Nuevo Plan del Gobierno "la Paz Total", pero algunos temen que este proceso desarticulación del Clan del Golfo se atomice. Lo único que se sabe es que este capo se oculta en alguna parte del Urabá y desde allí a mandado a matar a por lo menos dos de sus lugartenientes: uno fue Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias "Siopas", porque al parecer tenía la intención de formar un grupo criminal independiente, con

injerencia al norte de Antioquia. Y a Omar Noguera Camacho, alias "Boyaco", por apoyar este plan (Insight Crime, 2023).

## **VICTIMIZACIÓN Y LÍDERES SOCIALES**

Los líderes sociales asesinados en Córdoba eran personas que trabajaban por el bienestar de sus comunidades, incluyendo campesinos, líderes afrodescendientes, líderes indígenas y defensores del medio ambiente. Muchos de estos líderes sociales han trabajado arduamente por mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

En el 2021 se presentaron desplazamientos masivos en la región de Córdoba en Tierralta, en la vereda Santa Isabel del Manso, Vereda Nain, Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú y comunidad de Zabaletas, al interior del resguardo; allí, se reportaron 2.300 personas afectadas (La Razón, 2021). En esta región se han identificado situaciones crónicas de restricciones al acceso y posibles confinamientos que afectan, en particular, a poblaciones de los municipios de Tierralta, Montelíbano, Planeta Rica, Valencia, Puerto Libertador, San José de Uré y Canalete. Cabe resaltar, para este periodo, el confinamiento de 294 personas en la comunidad de Zabaletas (Briefing humanitario Córdoba, enero-julio, 2021).

Además, en el departamento de Córdoba ha ido aumentando, de manera significativa, el uso de minas antipersonales pasando de cero en 2017, a tres en 2018, seis en 2019, dos en 2020 y cuatro en 2021; los municipios más afectados son Puerto Libertador, Tierralta y Montelíbano, los cuales se configuran como aquellos que agrupan la mayor contaminación de dichos artefactos esto es, el sur de Córdoba o San Jorge, en esta zonas se recrudecieron los enfrentamientos entre los Caparrapos y el Clan del golfo, además está en la zona fronteriza con bajo Cauca antioqueño, ello implica a otros actores como el ELN y el frente 35 de disidencia Farc (Briefing humanitario Córdoba, enero-julio, 2021).

La situación en el Chocó continúa siendo preocupante, en cuanto al desplazamiento forzado para el periodo entre 2021 y 2024. De acuerdo con informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el primer semestre de 2022, se registraron más de 55.000 nuevos casos de desplazamiento forzado en Chocó (Radio Nacional, 2022).

Las comunidades más afectadas por el desplazamiento forzado son las comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes han sido desplazadas de sus territorios ancestrales y han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos. La falta de medidas efectivas por parte del Estado para proteger a estas comunidades y garantizar su derecho a la tierra y a la seguridad, continúa siendo una preocupación importante en esta región del país.

## **SUROCCIDENTE DEL PAÍS: TUMACO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA Y PUTUMAYO. LA VIOLENCIA EN EL POSACUERDO Y PAZ TOTAL**

Una caracterización general de la violencia en la zona del suroccidente del país, es que en el marco del posacuerdo de paz del año 2016, a pesar de la desmovilización de múltiples grupos armados, muchos de estos mutaron y se transformaron en nuevas organizaciones y, en conjunto con los grupos armados que no se desmovilizaron, vieron una oportunidad de ocupar y controlar zonas estratégicas, con importantes conexiones hacia el exterior y el interior del país, así como el control de economías ilegales como la minería ilegal, el cultivo y el procesamiento de la coca (Albarracín & Milanese, 2020).

Así mismo, las economías que son consideradas legales también han jugado un papel importante en la configuración de la violencia en los diferentes territorios del suroccidente del país, pues por la inseguridad que caracteriza estos lugares, las empresas privadas de minería y de monocultivos, optaron por la adopción de ejércitos propios, que protegieran sus propiedades de los

grupos armados, originando así la llegada de paramilitares a la zona y recrudeciendo aún más la violencia.

La crisis sanitaria del covid-19 también permitió el avance de los grupos armados en los territorios más vulnerables, ya que esta crisis generó una disminución de la presencia del Estado, situación que los grupos armados han sabido aprovechar (Figueroa, 2017).

Igualmente, están las acciones institucionales en el marco del posacuerdo de paz del año 2016, en el que se acordó, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), los cuales son una amenaza contra la “legitimidad” y el poder que han creado ciertos grupos armados en los territorios, afectando sus economías ilegales, e incrementando la intensidad del conflicto en esta región del país.

A ello se suma el vacío de poder que dejó las Farc, pues al desaparecer parcialmente de los territorios, generó una nueva oleada de violencia entre grupos armados de distinta naturaleza para ocupar esos espacios con su portafolio de criminalidad.

Según los datos de Indepaz, entre el año 2016 y el 2022, en el departamento del Valle del Cauca, se produjeron 687 bajas en combate, en el departamento del Cauca 1879, en el departamento de Nariño 1437 y en el departamento del Putumayo 402, con la particularidad que el año en que más bajas se produjeron fue en el año 2016, que es cuando se firma el acuerdo de paz.

Cuando estos datos se comparan con el total de homicidios que ocurren en estos departamentos, se observa cómo la dimensión de la violencia social y delincriminal supera ampliamente las cifras que arroja el conflicto armado en la región.

Durante el periodo comprendido entre los años 2016 y el 2023 se produjeron en el Valle del Cauca 16.866 homicidios, es decir el 62 % de los casos que se reportan en la

región; en el departamento del Cauca 5200 el 19 %, en el departamento de Nariño 3.908 el 14 % y en el departamento del Putumayo 1.158 que representa el 4,2 %; ello evidencia un elevado nivel de violencia homicida que viven estos territorios.

Estas cifras revelan una alarmante crisis de seguridad, la cual afecta a los ciudadanos del suroccidente del país. Los altos índices de homicidios están intrínsecamente relacionados con la pobreza que prevalece en estas zonas. La falta de oportunidades, recursos limitados y desigualdades socioeconómicas contribuyen, de manera significativa, a esta situación. Por tanto, es esencial abordar este problema de manera integral, no solo desde una perspectiva de seguridad, sino desde una perspectiva social y económica, para garantizar un futuro más seguro y próspero para los habitantes de esta región.

## **TERRITORIO Y CONFLICTO EN EL SUROCCIDENTE**

### ***Conflicto armado y paz en el departamento de Nariño***

San Andrés de Tumaco es un territorio que ha sido históricamente afectado por el conflicto armado en Colombia. Durante décadas, ha sido escenario de la presencia de diversos grupos armados ilegales, quienes han utilizado la zona para actividades como el tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión a la población civil. Además, la ubicación estratégica del puerto de Tumaco lo convierte en un punto clave para el tráfico de drogas hacia el exterior. En el marco del posacuerdo de paz del año 2016, muchos grupos armados ilegales se desmovilizaron, pero otros mutaron y se transformaron en nuevas organizaciones o se unieron a grupos ya existentes. Estas organizaciones delictivas tomaron el control de la zona, generando disputas por el territorio y las actividades ilícitas que allí se desarrollan.

El cultivo de coca se ha desarrollado ampliamente en la región, debido a su factor lucrativo para las personas más vulnerables en materia socioeconómica:

(...) para el 2018 Nariño era el departamento que más cultivos concentraba, con un total de 41.903 hectáreas distribuidas entre los municipios de Tumaco y El Charco. Esta concentración obedece, según el Gobierno nacional, a una densificación del cultivo, que facilita la intermediación, lo cual agrava la situación debido a los cambios que se han dado en los últimos dos años en lo que se refiere a las políticas de sustitución. (Unodc, 2022)

Por su parte, los campesinos del departamento han expresado su oposición a la erradicación forzada y a las fumigaciones con glifosato, que han sido implementadas por el Gobierno. Para manifestar su desacuerdo, han formado diversas organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) y la Asociación Porvenir Campesino (Asoporca). De esta manera, los campesinos han señalado que estas medidas han perjudicado tanto su calidad de vida como la del suelo en la región. Duarte (2017). A su vez, los intentos del Gobierno para transicionar hacia otros cultivos han fracasado y los campesinos no han recibido las herramientas ni las alternativas adecuadas para abandonar el cultivo de coca.

En el departamento de Nariño, además de la coca, la minería ilegal de oro y otros minerales, contribuye a agudizar la intensidad del conflicto social y armado, según Indepaz (2018), la minería ilegal ha traído consigo violencia, corrupción y el lavado de activos. De ahí que los esfuerzos del Gobierno y de diversas organizaciones para combatir la minería ilegal han fracasado y el problema persiste.

En San Andrés de Tumaco, al igual que en gran parte del suroccidente colombiano, existen diferentes actores armados que han ejercido control territorial y han participado en la dinámica del conflicto armado en la región. Entre estos actores se encuentran grupos armados residuales de las disidencias

de las Farc-EP, que no se acogieron al proceso de paz y se rearmaron después de la firma del acuerdo. También están presentes grupos armados dedicados al narcotráfico, como el Clan del Golfo y disidencias del Cártel de Sinaloa, además que opera la estructura de Comuneros del Sur, quienes hacían parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estos grupos han sido señalados por su participación en actividades de extorsión, control de cultivos de coca y minería ilegal, así como por la comisión de asesinatos y desplazamientos forzados.

Las Fuerzas Armadas, y en general la fuerza pública, hacen presencia en el departamento, con la responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de la población civil en el marco del conflicto armado. Sin embargo, en algunos casos han sido denunciados por presuntas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. De acuerdo con el Informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el primero de enero del año 2016 y el 28 de febrero de 2021, se registraron 43 asesinatos de líderes sociales, 8 masacres y 37 víctimas fatales.

También, en el departamento de Nariño, se han realizado distintos actos terroristas que ponen en peligro la seguridad y la tranquilidad de la población, los cuales han sido perpetrados principalmente a través del uso de artefactos explosivos y dinamita. Y se han registrado un preocupante número de 64 casos en los que se utilizaron estos explosivos como practica de violencia. Por otra parte, el secuestro es un factor de suma relevancia al abordar el tema de la seguridad, el cual se ha definido como: "la privación ilegal de la libertad personal, lo que constituye una violación a los derechos humanos" (Ministerio de Defensa, s.f, p.1).

En este sentido, en el departamento de Nariño se han producido un total de 32 secuestros en el período comprendido entre los años 2016 y 2023. Es importante destacar que, durante los años 2017 y 2018, estos actos se intensificaron de manera

alarmante, con un total de 11 y 8 secuestros, respectivamente, lo que representa un total de 19 casos. Esto significa que el 63 % de los secuestros ocurridos en el departamento se concentraron en estos dos años. A pesar de esta tendencia preocupante, Nariño se encuentra significativamente por debajo de la media nacional en cuanto a casos de secuestro.

Los asesinatos selectivos son otro de los aspectos preocupantes, porque en el departamento de Nariño y en el periodo de 2016 a 2023, se han registrado 246 casos. Asimismo, el año con la mayor ocurrencia de asesinatos selectivos fue 2017, con un total de 84 casos, lo que representó el 34,14 % de los casos registrados en ese periodo.

## **EL CONFLICTO ARMADO Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA**

El departamento de Cauca ha sido históricamente una zona de influencia de grupos armados ilegales en Colombia. Actualmente existen varias organizaciones armadas que operan en la región, entre ellas el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que tiene una fuerte presencia en algunas áreas rurales del departamento. Este ha sido responsable de secuestros, ataques a la infraestructura petrolera y minera, y extorsión a empresas y pobladores. De otro lado, las disidencias de las Farc, tienen una presencia significativa en el departamento, especialmente en las áreas fronterizas con el departamento de Nariño; también, algunos grupos paramilitares aún tienen presencia en Cauca, sobre todo en las zonas de producción de coca y en las rutas del narcotráfico.

A lo referido se suman las bandas criminales, conocidas como "bacrim", quienes surgieron después de la desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y se dedicaron principalmente al narcotráfico y la extorsión, y tienen una presencia significativa en la región.

En relación con la presencia de actores armados en el Cauca, según Indepaz (2022), se articula a cuatro comandos: el primero

es el Comando Coordinador de Occidente, compuesto por la Columna Móvil Jaime Martínez, el Frente Carlos Patiño, la Columna Móvil Dagoberto Ramos; el segundo es el Comando Conjunto Occidental Segunda Marquetalia, compuesto por el Frente Dagoberto Ramos Ortiz, la Columna Móvil Vladimir Steven, la Columna Móvil Cristian Pérez, la Columna Móvil Fredy Ortiz, y el Frente Diomer Cortés; el tercer comando es del ELN, que está compuesto por el Frente de Guerra José María Becerra, el Frente Manuel Vásquez Castaño, y la Compañía Milton Hernández; el cuarto comando lo constituyen el Clan del Golfo bajo, la denominación de Autodefensas Gaitanista de Colombia AGC, y algunos residuos del EPL.

Las actividades ilegales preponderantes en el departamento son el cultivo y la producción de coca y la minería ilegal. Cauca es, además, uno de los principales productores de coca de todo el país, pues para el año 2019 se calculaba un área cultivada de 20.687 hectáreas, según el Observatorio de Drogas de Colombia (2020).

A su vez, la Defensoría del Pueblo, desde el año 2019 ha identificado al departamento del Cauca como una zona de alto riesgo para las organizaciones que buscan la movilización en defensa de sus derechos esenciales, en particular las organizaciones indígenas, afros y de víctimas con permanentes amenazas para los líderes de la población, a quienes les han sido vulnerados sus derechos humanos fundamentales.

La Defensoría del Pueblo ha identificado que el departamento del Cauca concentra una elevada cantidad de homicidios, amenazas e intimidaciones, situación que continúa acentuándose de acuerdo con los elementos expuestos, sin que la acción institucional haya sido suficiente y efectiva para evitar las violaciones a los derechos fundamentales de los grupos sociales en el departamento. Al respecto se encuentran una serie de Alertas Tempranas: No. 026-18; No. 035-18, AT 06718, AT No. 050-18 para la región de Miranda, la subregión del Naya y los municipios de Caloto y Corinto.

Además, desde el año 2016 hasta el 2022, se ha observado un incremento en el número de asesinatos a líderes sociales por parte de grupos armados. Los municipios más afectados son Caloto con 34 asesinatos, Corinto con 31, Santander de Quilichao con 24, Buenos Aires con 22 y Toribio con 21. Estas cifras reflejan la gravedad de la situación en la región y la urgencia de tomar medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar su seguridad.

En la actualidad, el número de líderes sociales asesinados ha alcanzado cifras alarmantes, con un total de 57 víctimas. En particular, los municipios de Argelia, Santander de Quilichao y Buenos Aires, los cuales han sido escenarios recurrentes de estos crímenes. En el departamento, desde el año 2020 y hasta el 2023, se han presentado 33 masacres, lo cual ha dejado un total de 116 víctimas en todo el departamento (Indepaz, 2022).

Si se analizan los actos terroristas ocurridos en el departamento del Cauca entre los años 2016 y 2023, es posible observar que se registraron un total de 107 incidentes. Entre estos se resalta la alarmante prevalencia de artefactos explosivos y dinamita, con un total de 32 casos, lo que representa aproximadamente un tercio (33 %) del total de incidentes reportados en la región del Cauca.

El secuestro constituye otro de los flagelos con que se golpea a las comunidades en el departamento; en el periodo comprendido entre el año 2016 y el 2023 se han registrado un total de 76 casos de secuestro, siendo el 2017 el año con la mayor ocurrencia de secuestros, alcanzando un total de 20 casos registrados. Los asesinatos selectivos en el departamento del Cauca durante el período de estudio de los años 2016-2023, tiene un total de 408 casos. Es relevante destacar que el año 2020 marcó un punto crítico en esta lamentable estadística, pues se registró un total de 123 casos, lo que representa aproximadamente el 30 % de todos los casos reportados durante el período analizado.

Las violencias sexuales en el departamento del Cauca también son un tema igualmente preocupante. Entre los años 2016 y 2023, se registraron un total de 35 casos en la región. El año de mayor incidencia fue el 2018, con un total de 9 casos, lo que corresponde aproximadamente al 25.7 % del total de casos registrados durante el período analizado.

Asimismo, en el departamento se ha generado una vigorosa movilización social en contraposición a la situación que están viviendo, por la violencia de grupos armados ilegales. En el marco del posacuerdo de paz del año 2016, estos movimientos han seguido en la lucha por defender los derechos humanos, la justicia y la construcción de la paz en su departamento.

Uno de los movimientos más importantes que tiene el departamento del Cauca es el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que ha buscado ser la voz de los pueblos indígenas y han participado de manera activa en la implementación de los acuerdos de paz en el departamento, además de proteger los derechos de los suyos en el proceso.

Otro movimiento social que en su momento jugó un papel esencial fue el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, el cual defendió los derechos de los campesinos, estudiantes, indígenas y sindicalistas de la región y buscó reivindicar programas de justicia social en el marco del acuerdo de paz.

En el marco del posacuerdo de paz del año 2016 y el desarrollo de la política de Paz Total, se establecieron ciertas pautas y se pactaron los compromisos institucionales para poder implementar la reparación integral y la construcción de paz en las zonas más azotadas por el conflicto armado.

En la lucha contra el narcotráfico se han implementado programas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), para reemplazar los cultivos de coca por cultivos lícitos, a través de la entrega de incentivos y asistencia técnica a las familias campesinas azotadas por el conflicto armado.

También se encuentra el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, el cual ha sido de vital importancia para una mejor comunicación de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, para facilitar el acceso a servicios básicos para las comunidades. Cabe decir que otras implementaciones que se han hecho en el departamento, desde el acuerdo de paz del año 2016, son el fortalecimiento de la atención en salud, el desarrollo de proyectos productivos, la creación de espacios de participación y diálogos interculturales, la generación de una educación de calidad e integral, el fortalecimiento de la presencia militar y policial, el desarrollo de operaciones militares y la promoción del diálogo y la implementación de los programas de justicia transicional.

## **EL CONFLICTO ARMADO Y PAZ EN EL VALLE DEL CAUCA**

El departamento del Valle del Cauca se ha caracterizado históricamente como una zona de conflicto y violencia, la cual se ha visto afectada por diversos actores armados (además de los diferentes grupos delictivos que operan en el sector). Algunos de los actores de la violencia en el Valle del Cauca son las Farc, el ELN, el Clan del Golfo, entre otros, quienes se enfocan en actividades como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro; aunque existen también bandas criminales que operan en la región y se dedican a actividades ilícitas como el narcotráfico, el robo y la extorsión y, residuos de grupos neoparamilitares, con una presencia reducida pero que siguen operando en la región y ejerciendo violencia.

En el departamento también hacen presencia las disidencias de las Farc que, tras la desmovilización posterior al acuerdo de paz con este grupo, algunas facciones disidentes se reorganizaron y continúan operando en la región, principalmente en zonas rurales y algunas urbanas. A ello se suma que el valle del Cauca tiene problemas de seguridad urbana por la presencia de grupos armados urbanos, en las principales ciudades del Valle del Cauca

como Cali, Palmira y Buenaventura, donde operan desarrollando actividades como el microtráfico de drogas, el hurto calificado y la extorsión.

Según los datos de la Comisión de la Verdad (2022), en el departamento del Valle del Cauca se registró un número de 450.664 personas que perdieron la vida entre los años 1985 y 2018, sin embargo, la comisión de la verdad reconoce que esa cifra podría ser mayor. Los principales responsables de estos homicidios fueron los grupos paramilitares, con un registro de 205.028 personas asesinadas, lo que corresponde al 45 % de los asesinatos del departamento; a su vez, los grupos guerrilleros tienen un registro de 122.813 víctimas, lo que representa un 27 % de los asesinatos; también está el 21 % de las Farc-EP; el 4 % del ELN y el restante 2 % a las demás guerrillas que operan en el territorio.

Finalmente, a la fuerza pública y a otros agentes estatales que, según la Comisión de la Verdad, se les atribuye 56.094 personas asesinadas, lo que equivale al 12 % del total de homicidios ocurridos. En ese periodo la violencia manifiesta se expresó a través de prácticas que incluyen: detención-desaparición forzada, secuestro, reclutamiento, desplazamiento forzado, violencia sexual.

En el periodo comprendido entre los años 2016 y 2023 se han registraron un total de 85 actos de *violencia terrorista* en la región, lo que muestra que hay bastantes conflictos, así como un desafío significativo para la seguridad y la estabilidad en el área. Al menos 20 casos registrados establecen el uso de explosivos como armas utilizadas en actos terroristas en el Valle del Cauca, durante el período estudiado. En cuanto a la frecuencia de armamento empleado, le siguen las granadas de mano, con un total de 19 casos registrados. Así, en el análisis de la incidencia de actos terroristas en el departamento del Valle del Cauca, durante este período, subraya la importancia de abordar la proliferación de armas y artefactos explosivos en la región y la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y prevención.

En el departamento del Valle del Cauca, durante el período comprendido entre los años 2016 y 2023, se han reportado un total de 27 casos de secuestro en la región, siendo el año 2018 y el 2022 los años en que mayor número de secuestros se produjeron, con un total de siete. Estos dos años representan el 50 % del total de secuestros ocurridos en el departamento durante ese periodo.

En relación con el indicador de asesinatos selectivos en el departamento del Valle del Cauca, durante el período que abarca desde el año 2016 hasta el 2023, se han registrado un total de 107 casos de asesinatos selectivos en la región, una cifra que plantea serias preocupaciones en términos de seguridad y derechos humanos.

El año 2017 se destacó por presentar la mayor incidencia de casos de asesinatos selectivos, con un total de 26 casos. Esta cifra representa el 24.3 % del total de casos registrados durante el período estudiado. En relación con la preocupante problemática de la violencia sexual, en el departamento del Valle del Cauca, durante el período del año 2016 hasta el 2023, se han documentado un total de 60 casos de violencia sexual, una cifra que demanda una atención inmediata y efectiva para proteger a la población. El año 2018 fue el de mayor incidencia en este sentido, con un total de 21 casos registrados, esto equivale al 35 % del total de casos reportados.

En el marco del posacuerdo de paz, en el departamento del Valle del Cauca, se han implementado ciertas medidas que buscan garantizar la paz y la tranquilidad de la población, reparar a las víctimas del conflicto armado, garantizar los derechos humanos, los cuales les han sido arrebatados a los pobladores a lo largo de la historia. Para ello se generó la creación de la Unidad Territorial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con la que se quiere atender y reparar a las víctimas afectadas por el conflicto armado. También se formalizó e implementó una política educativa de formación para la paz y convivencia; incluso se promovió la participación de

los ciudadanos en las actividades de la cultura; se fortaleció la seguridad de la población con la presencia de autoridades civiles y militares en el sector urbano y rural especialmente, a fin de garantizar protección a las personas más vulnerables y, se dinamizaron los Programas de Desarrollo Rural Integral (PDRI), con el cual se buscó generar proyectos de productivos para todas aquellas comunidades campesinas y afrodescendientes.

## **CONFLICTO ARMADO Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

El departamento del Putumayo ha sido uno de los más azotados por la violencia del conflicto armado en Colombia, lo cual ha llevado a diferentes formas de violencia a través de la historia. Los principales grupos armados que se han hecho presente en el territorio han sido las Farc-EP y el ELN. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) en un informe del 2020, se registró en el Putumayo en el periodo del año 2016 al 2020 una cifra de 309 homicidios, la cual se reparten entre las disidencias de las Farc con 83 asesinatos, es decir el 54 % de los casos en el departamento, de igual forma, parte de los grupos del narcotráfico reportaron 47 asesinatos, lo que equivale al 31 % de los casos y, por último, el ELN tuvo 24 asesinatos en ese período, es decir el 16 % del total de las muertes en el Putumayo.

Según el Simci (2021) y el Unodc (2020), el departamento del Putumayo tiene cultivos de coca que, en el año 2016, registraban una cifra de 22.970 hectáreas; para el 2017 los cultivos alcanzaron la cifra de 24.470 hectáreas, en el 2018 se elevó a 27.213 hectáreas de coca; en el 2019 se cultivaron 31.990 hectáreas y, por último, en el año 2020 se registraron 29.509 hectáreas de coca, con una pequeña disminución en el año 2021 de un 7,8 % con respecto al año anterior. La dinámica de crecimiento y decrecimiento de estos cultivos está dada por las lógicas del desarrollo del narcotráfico, en el marco del conflicto armado y el desarrollo de las políticas de erradicación impulsadas por el Gobierno.

Igual que en otras partes del sur occidente del país, en el departamento del Putumayo se han utilizado explosivos en actos terroristas, con el uso de dinamita, granadas y minas antipersonales que afectan no solo a los miembros de la fuerza pública o a los miembros de otros actores armados, sino con frecuencia a la población civil. A ello se suma una preocupación mayor; los asesinatos selectivos en el departamento: del año 2016 a 2023 se registraron un total de 118 casos de asesinatos selectivos, lo que plantea un cuestionamiento significativo de la política de seguridad y derechos humanos en la zona. En año el año 2020 se presentaron un total de 45 asesinatos, es decir el 45 % de los casos reportados en el periodo de estudio.

La violencia sexual en el departamento del Putumayo reportó en el periodo del año 2016 - 2023 un total de 16 casos de violencia sexual en la región, siendo los años con mayor número de casos el 2016, año de la firma del acuerdo de paz y el 2019, con 6 casos en cada uno de estos años, lo que representa el 37.5 % del total de casos registrados durante el período analizado (Datos Abiertos Colombia, 2023).

La acción institucional en el Putumayo no es muy diferente a la acción que se ha implementado en las demás regiones del suroccidente del país: se promovió la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) el cual buscaba erradicar la producción de hoja de coca y sustituir, de manera voluntaria, este tipo de cultivos ilícitos al reemplazarlos por cultivos lícitos, lo que conllevó un avance significativo en el año 2020.

También se colocó en marcha los PDET (Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial), los cuales buscaban planificar y gestionar el desarrollo económico y social en las zonas urbanas y rurales, en donde está presente el conflicto armado. También se fortalecieron las instituciones en el territorio que históricamente ha sido abandonado por el Estado; se crearon canales que buscan concretar diálogos con los grupos armados

que se quedaron por fuera del acuerdo y se ha fortalecido la presencia militar en la región, cuyo propósito constitucional es el de garantizar la seguridad del territorio.

## **CONFLICTO ARMADO Y PAZ EN LA REGIÓN DE LA COSTA ATLÁNTICA: BOLÍVAR, MAGDALENA, SUCRE, CESAR Y LA GUAJIRA**

La reactivación de la violencia, en la región del Caribe, no solo se produce por las características y ventajas territoriales, socioeconómicas y políticas que ofrece la subregión sino, como consecuencia de un deterioro paulatino de las posibilidades de paz a partir de la continuidad y longevidad del conflicto, pues este se ha ido profundizando con los años, haciendo más difícil la implementación de las estrategias de paz, al estar dominada la subregión por actividades y grupos ilegales que encuentran en el acuerdo una posibilidad de expansión en un negocio ya establecido, como lo refiere Elisa Ferreri y Ángela Trujillo (2019).

Por su parte Trejos (2020), afirma que el acuerdo de paz dio lugar a una transición catastrófica, puesto que se pasó de una “estabilidad armada” a una especie de “anarquía criminal”, en donde los grupos previos y posteriores al acuerdo encontraron una posibilidad de dominio territorial y social con la desaparición de las Farc-EP. Otros factores de riesgo que permiten la perpetuación de la violencia, son: “los bajos niveles de desarrollo e ingreso per cápita; la inestabilidad de las instituciones políticas y su relación con las decisiones de inversión del gasto en las políticas públicas; la dependencia de las exportaciones a los productos primarios; la existencia de condiciones que permitieron la viabilidad militar de los grupos insurgentes para continuar con el conflicto como son las condiciones geográficas, la existencia de recursos naturales y la presencia de economías criminales” (Ferreri y Trujillo, p.5).

## **Conflicto Armado y paz en el Caribe Colombiano**

Con la firma del acuerdo en el año 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se llevó a cabo una caracterización de los grupos armados e ilegales que se encontraban dentro de los territorios, llegando a diferenciar y clasificar a cada uno de los grupos, dependiendo de sus “niveles de injerencia y control sobre las poblaciones” (Indepaz, 2020, p.11).

De esta manera, se caracterizó a estos grupos como Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), Organizaciones de Crimen Organizado y grupos disidentes de las Farc que hoy en día se llaman Grupos Armados Residuales (GAOr), entre otros. Esto permitió comprender que la denominación Grupo Armado Organizado (GAO):

(...) es para las estructuras con mayor poder, con líneas de mando definidas, subestructuras con control de territorio, prendas distintivas y formación de guerra. Mientras que los Grupos Delincuenciales Organizados, tienen un poder más local, aunque muchas veces sirven de terceros para los GAO, llegando a tener injerencia transnacional y realizando acciones de gran envergadura” (Indepaz, 2020, p.11).

También, de acuerdo a Indepaz, se puede encontrar el uso de denominaciones como Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO), que son usadas generalmente para definir estructuras con características comunes sobre su estructura, rangos, procedencia, objetivos y actuaciones (Indepaz, 2020).

A partir de la clasificación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional acerca de los grupos que se encuentran dentro del marco del territorio de la Costa Atlántica, es posible llevar a cabo una caracterización de estos grupos armados, dependiendo

de su ubicación dentro de las subregiones mencionadas, logrando identificar qué organización, grupo armado, delincuencia, entre otros ejerce control, despliega sus lógicas y dinámicas e identifica el repertorio de violencia que estos desempeñan sobre el territorio y su población.

El departamento de La Guajira evidencia la presencia de grupos GAO y GOD. En los primeros se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo, el cual es un grupo neoparamilitares. Y, en los segundos, se encuentra la presencia del grupo Los Rastrojos, Los Pachencas, también conocidos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Sin embargo, la Guajira no presenta condiciones para sostener grandes estructuras militares, pues el contrabando de gasolina y víveres desde Venezuela ha disminuido, no hay cultivos de coca, ni laboratorios de procesamiento, su exportación es manejada por grupos locales al mando de organizaciones paramilitares, y no es una fuente potencial de explotación de minerales, pues el Cerrejón, una de las minas de carbón más grandes, se encuentra bien resguardada, y solo es posible su extracción a partir de atentados en su transporte o mediante la extorsión a sus trabajadores, lo cual promueve la violencia local (Trejos, 2023).

A pesar de lo mencionado previamente, esta subregión mantiene una presencia de grupos ilegales constante y se han venido intensificando en la zona fronteriza por la ubicación estratégica que permite acceder a territorio venezolano, movilizarse por el resto de la costa atlántica y la ventaja que ofrece la proximidad al mar.

Esto se logra evidenciar en el informe “Sin Dios ni ley, análisis de la situación de seguridad en la frontera Colombo-venezolana” (2020) por parte de la Fundación Paz y Reconciliación, en donde se muestra la intensificación de la presencia del ELN en “las zonas de frontera de la Guajira y el Cesar por

la presencia del Frente “Camilo Torres” que opera en el Catatumbo pero que intenta abrir los corredores de narcotráfico en el Caribe” (El Heraldo, 2020). En este reporte, se apoya y concluye lo ya mencionado y se afirma que serán las zonas fronterizas de la Costa atlántica las que promoverán el aumento en la presencia de grupos rebeldes con el fin de operar en las comunidades como estrategia de control socio territorial.

En la Alta Guajira, que comprende el municipio de Uribía, donde se evidencia la existencia de puertos marítimos y terrestres de gran importancia a nivel económico como Puerto Nuevo, el cual permite la exportación de droga y movilidad de personas a nivel marítimo, reduciendo la posibilidad de enfrentamientos con las Fuerzas Armadas.

En la Media Guajira, se encuentra una gran afectación en municipios como Maicao, Riohacha, Paraguaipoa, Albania, Manaure, entre otros, por la falta de presencia estatal y es de importancia resaltar que en esta zona oriental se encuentran las minas de carbón del Cerrejón. En la Baja Guajira, la cual cubre parte del piedemonte oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentran ubicados, municipios como Fonseca, el Molino, Villanueva, Urumita, entre otros, los cuales cuentan con una gran vegetación y zonas de cultivo. Además, esta subregión posee una importante red fluvial compuesta por la cuenca de los ríos Palomino, Negro, Jerez y San Salvador, los cuales se han convertido en zona estratégica para los grupos armados como red de narcotráfico y trata de personas.

Los municipios fronterizos de la Guajira se encuentran establecidos en un sector de la Serranía del Perijá, una zona “estratégica porque une el nororiente del Cesar y el centro y sur de La Guajira con Venezuela, además ha sido, y es utilizada, para el tráfico ilegal de material de guerra y como corredor de movilidad. La presencia en esta serranía representa una ventaja táctica y estratégica para los grupos armados ilegales porque facilita su aprovisionamiento y su operatividad militar” (Trejos, 2020).

El portafolio de criminalidad de los grupos armados ilegales que operan en el territorio lo constituyen las rentas ilegales, asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados de personas que se oponen a cooperar con el control de estos grupos.

En la Sierra Nevada de Santa Marta y la troncal Caribe se evidencia la presencia de los Gaitanistas, quienes se han apropiado de rutas ilegales para el transporte de droga. En esta misma zona, las ACSN (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) tienen una especial influencia (eje Ciénaga-Santa Marta-Riohacha), pues funcionan como brazo armado de la Oficina Caribe, siendo su principal objetivo:

(...) mantener el control territorial sobre el troncal caribe y las rutas y puntos estratégicos de la Sierra Nevada de Santa Marta por su privilegiada posición geográfica como centro de acopio, procesamiento y punto de exportación de clorhidrato de cocaína al exterior (Trejos, 2020, p.10).

Se conoce que las ACSN forman parte de una “oficina de cobros” que opera desde Santa Marta hasta Palomino en la Guajira, cumpliendo funciones del Estado, manteniendo el monopolio de la violencia, administrando justicia y recaudando “tributos”, esto último mediante cobro de extorsiones al sector agroindustrial (Palma de aceite y banano), vacunas a comerciantes, turismo, comercio y al comercio de tierras (Trejos, 2020, p.10)

Es preocupante que en el mismo informe se mencionan impactos directos a niños, niñas y adolescentes en el municipio de Paraguachón, en el cual se han identificado redes de prostitución, donde se encuentran vinculados niños y niñas entre los 12 y 17 años, identificados o no como indígenas (Heraldo, 2020). Este caso de prostitución infantil también se encuentra vinculado a la movilidad por el paso fronterizo.

En el **departamento del Magdalena**, el factor de la pobreza tiene una relación

directa con el establecimiento y la longevidad de actuación de grupos armados ilegales, en este territorio se encuentran grupos ilegales paramilitares como el Clan del Golfo y grupos organizados delincuenciales como Los Rastrojos y Los Pachencas (ACSN). Es de amplio conocimiento que el Clan del Golfo tiene una importante presencia y control sobre los departamentos de la Costa Atlántica.

A su vez, el departamento de Magdalena les provee seguridad de acción, facilidad de movilidad entre el Atlántico, Bolívar y la Guajira, para el tráfico de droga, siendo la sustancia más común el clorhidrato de cocaína, la cual es movilizada en buques mercantes que se encuentran en altamar o atracados en algún puerto del territorio (El Heraldo, 2021).

El propósito del Clan del Golfo es lograr un dominio total del territorio del Caribe, con el fin de desarrollar y controlar la economía del narcotráfico y de otras actividades ilegales como las extorsiones a los cultivadores de banano y palma, sin embargo, la presencia de distintos grupos armados reduce sus posibilidades de control y los mantiene en tensión y enfrentamiento con las Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada.

En el desarrollo de las economías ilegales, la Sierra Nevada de Santa Marta juega un papel estratégico porque compromete territorios del departamento de Magdalena, la Guajira y el Cesar, constituyéndose en un corredor natural entre tres departamentos, el cual ofrece ventajas en el ámbito del narcotráfico al contener puntos de exportación de drogas, pues cuenta con el corredor de movilidad que puede funcionar como zona de retaguardia (Trejos, 2022) y esto reduce las posibilidades de confrontación entre las Fuerzas Armadas por su relieve y las características de su vegetación, la presencia de suelos fértiles para el cultivo de coca, y la marcada ausencia de control estatal.

Teniendo en cuenta esto, la confrontación entre el Clan del Golfo y las ACSN

(Autodefensas conquistadoras de la Sierra de Santa Marta) surge alrededor de la posibilidad de ocupar los territorios que dejaron la desmovilización de las AUC en el año 2006 y la desaparición de las Farc-EP, aunque en esa disputa se encuentran también las disidencias de las Farc y el ELN.

El **Departamento del César** cuenta con 6 regiones naturales que son de importancia geoestratégica para los grupos armados al margen de la ley. Dentro de la extensión del territorio operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y reductos del Ejército Popular de Liberación (EPL), estructuras criminales del Clan del Golfo en alianza con el Clan de los Rojas, los cuales son conocidos como un grupo familiar que se ha ido posicionando en busca de oportunidades para prosperar en el mundo de lo ilegal. Este grupo conoce bien las zonas en las que se encuentran ubicados, cuentan con terrenos y se han apropiado de rutas ilegales para el transporte de droga y debido a que tiene una larga trayectoria dentro del conflicto armado, pues están constituidos desde antes del cambio de siglo. Además, este factor de poder se complementa con la característica de contar con una fuerte influencia DE Estados Unidos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por lo que no es de extrañar que el Clan del Golfo busque aliarse a este grupo para extender su influencia al resto de las zonas del Atlántico y crecer en conjunto. También se ha hecho evidente la presencia de Los Caparros y Los Pachencas, grupos criminales que trabajan a partir de una alianza, con el objetivo de enfrentar el Clan del Golfo y el Clan de Los Rojas.

En el Departamento del Cesar se encuentra uno del territorio más deseados por la criminalidad, la Serranía del Perijá, pues en esta convergen las rutas que conectan a los territorios del sur de Bolívar, el Magdalena Medio y el Catatumbo, zona reconocida por la siembra de hoja de coca y el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Es un corredor de traslado de clorhidrato de cocaína hasta los puntos de exportación en el Caribe colombiano y de traslado de insumos químicos hasta los sitios de procesamiento (Trejos, 2020, p.9).

En la Serranía del Perijá hace presencia el ELN, que ha logrado una ventaja estratégica en la evasión del enfrentamiento con la acción armada del Estado, el acceso a Venezuela y la facilitación de la construcción de redes económicas, logísticas y de apoyo político en este país (Trejos, 2020). Por su lado, el EPL también ha fijado como objetivo su asentamiento en la zona sur del Cesar el tratar de asegurar territorio en el que converjan los corredores de movilidad, pues se ha comprendido que esta zona tiene un papel articulador de la red de narcotráfico.

La presencia de estos grupos armados en el territorio del Departamento del Cesar ha generado despojos de tierras, asesinatos a campesinos y presiones a la comunidad en general produciendo desplazamientos forzados y asesinato de líderes sociales. El aumento en la explotación del carbón ha generado dinámicas de extorsión a las empresas, despojos a los campesinos que poseían suelo con potencial de carbón, prácticas de extorsión e intimidación de campesinos para obtener la tierra de forma forzada, para luego venderlas a las multinacionales que llegan al territorio.

Uno de los impactos sociales más importantes de las actividades de los grupos armados ilegales en el territorio, tanto en el corredor minero, como en las zonas de movilidad de la Serranía de Perijá, ha sido la violencia sexual y la violencia basada en género, la cual se expresa con la prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, explotándolos sexualmente y tomando ventaja de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que predominan en las zonas.

Además, en relación con este tema, se ha evidenciado el pago de coimas al ejército para actuar libremente, así como presiones, amenazas, tráfico de personas con fines de explotación sexual, extorsiones, reclutamiento de personas con experiencia militar, violencias contra grupos minoritarios como los afrodescendientes y los indígenas y el reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes en la gran variedad de actividades de las economías ilegales que manejan (Indepaz, 2020).

En el **departamento de Bolívar** hacen presencia y se confrontan el ELN, el Clan del Golfo (AGC) y una presencia irregular del grupo de Los Rastrojos. Ha sido evidente a lo largo del análisis de la Costa Atlántica que el Clan del Golfo se ha fijado una narcoestrategia en la que busca aliarse con grupos con trayectoria criminal como el Clan de los Rojas en el Cesar o con el ELN en Bolívar, pues se ha fijado como propósito central el dominio total de las actividades ilícitas en estas zonas, sin la necesidad de enfrentarse a otros grupos armados, ni con la fuerza pública.

En este territorio el Clan del Golfo se encuentra en un acuerdo con el ELN para no entrar en combates, el cual han llamado la “Paz Mafiosa” y donde se establece que los actores armados adquieren acceso a recursos por los que antes debían luchar entre ellos (Trejos, Badillo, 2021). Se considera que esta Paz mafiosa es resultado de la presencia de un tercer actor, el cual sería las disidencias de las Farc-EP, quienes buscan recuperar sus territorios, las rentas que administraban y el control social y territorial que antes poseían.

Esta paz tiene una consecuencia secundaria, pues al evitar la necesidad de los enfrentamientos, inevitablemente se reducen los índices de violencia y los costos que con ella vienen al acabar con la violencia indiscriminada, con el fin de evitar la intervención militar y mediática; sin embargo, es importante aclarar que esta no desaparece por completo, sino que por el contrario se ha dirigido hacia el asesinato de líderes comunitarios y excombatientes de las Farc-EP.

Al ser dos grupos con gran poder al margen de la ley y contar con una alianza, han logrado establecer confinamientos forzados, un régimen de amenazas a la población civil, desplazamiento forzado, masacres, entre otros factores que afectan a la población y que se derivan de la confrontación a las disidencias de las Farc.

Además de su alianza con el ELN, el Clan del Golfo, ha llevado a cabo, en el

Departamento de Bolívar, en particular en el municipio de María La Baja, alianzas con pandillas juveniles y grupos locales para lograr ejercer control social y territorial. Los miembros de estos grupos son enseñados a amenazar y extorsionar a la comunidad en general, dando lugar a homicidios selectivos, manejo de narcotráfico, participación política activa, control territorial, manejo de minas de oro ilegales y cultivos de coca; también ejercen extorsiones a campesinos y docentes para la no enseñanza de actitudes revolucionarias a los niños, niñas y adolescentes, amenazan a líderes sociales, restringen la movilidad en el territorio y ejercen pleno control de los corredores del narcotráfico en lo que se moviliza la pasta base de coca hacia los laboratorios de procesamiento en otras zonas del país, como el Magdalena, el Catatumbo, Santander o, inclusive, fuera del país.

Es importante señalar que uno de los corredores de control de los grupos ilegales es el que conecta con el Golfo de Morrosquillo, que pertenece a los departamentos de Sucre y Córdoba y representa un corredor de droga estratégico, así como la Mojana Bolivarense.

En el **departamento de Sucre** se da la presencia del Clan del Golfo, Los Rastrojos que se hacen llamar también Rodas Campesinas Populares y Los Caparros.

El Clan del Golfo ejerce dominio sobre los municipios de Guaranda y Majagual, los cuales representan una estrategia de movilidad y control de rutas del narcotráfico y otras economías ilegales entre los departamentos de Córdoba, Bolívar y Antioquia, a través del intrincado sistema de caños, ciénagas y arroyos que comunica a los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge” (Suarez, Mayorga, Rodríguez, 2020). Las estrategias de movilidad fluviales se hayan controladas por el Clan del Golfo, quienes han hecho presencia en los territorios próximos a partir de la gestión del orden público, sanciones económicas y extorsiones, restricciones de movilidad, aplicación de “justicia”, asesinatos selectivos, atentados, entre otros hechos de criminalidad.

También se identifica la presencia del grupo Los Caparros, también conocidos como Frente Virgilio Peralta Arenas, quienes tienen una mayor presencia y participación en el negocio del narcotráfico, en los departamentos de Córdoba y Antioquia controlan grupos asentados en el sur de Sucre, los cuales suelen sostener una alianza con el Clan del Golfo. La presencia de estos grupos armados en el territorio ha ido complejizando la situación social de Sucre, al presentarse agresiones a los liderazgos sociales, quienes son el blanco de amenazas junto a docentes y educadores en municipios como San Marcos, Sucre, Majagual, Guaranda y San Onofre.

Otra de las razones del asentamiento de estos grupos armados es el control y dominio territorial del Golfo de Morrosquillo como corredor natural, al ser identificado como ruta clave del narcotráfico con “playas, sistemas fluveomarinos y de manglares propicios para el embarque y desembarque de droga y otras mercancías ilegales” (Defensoría del Pueblo, 2018).

Además, también se presenta interés con respecto al control del territorio de los Montes de María (región ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar), pues presenta densas selvas y montañas que facilitan las actividades ilegales, haciéndose invisible al ojo público, lo que les permite actuar libremente, generando terror mediante homicidios, amenazas directas e indirectas, control de la movilidad, intimidaciones y controles sociales, entre otras dinámicas que afectan continuamente el desarrollo de vida en este territorio del país.

El Estado, a través de la fuerza pública, constantemente adelanta operaciones contra las organizaciones criminales en toda la región Caribe, presentándose combates entre el ejército y el ELN y produciendo captura y bajas importantes para el clan del Golfo. La reactivación de todas las operaciones militares contra este grupo, a pesar de la propuesta de Paz Total, ha obligado a la intervención estatal para evitar el actuar libre que atenta contra los derechos humanos

de las poblaciones vulnerables. No obstante, es importante mencionar que a partir de la reactivación de estas confrontaciones, como el caso del enfrentamiento entre las fuerzas públicas con el ELN y el Clan del Golfo, se da lugar a un atentado contra la seguridad y los derechos de las comunidades, porque estas acciones bélicas afectan a la población civil, la cual ha quedado en medio de la violenta confrontación armada.

A pesar de que las autoridades no se han referido a las consecuencias de los enfrentamientos, ni han respondido directamente a los clamores de la comunidad, se ha mantenido hasta ahora la idea de que el Estado ha intentado garantizar la seguridad de la Troncal Caribe, con el fin de ir doblegando las actividades de los grupos armados y narco paramilitares. Tal es el caso en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde los pobladores aseguran que el ejército hizo una arremetida muy fuerte, con mucha presencia de las tropas del batallón de alta montaña, en la parte alta del corregimiento de Palmar de la Sierra, lo que no significa que los actores armados salgan del territorio, sino que se ocultan y se mimetizan entre la población y, a través de drones, hacen vigilancia sobre las montañas, para saber en qué parte se encuentra la fuerza pública (Semana, 2022).

Así mismo, las fuerzas militares buscan hacer presencia en la Sierra, ya que es un corredor de movilidad estratégico porque de ahí se puede pasar a la serranía del Perijá, a Venezuela, La Guajira, y al Cesar. También se puede hacer el tránsito, sin ningún tipo de problema, porque hay un macizo montañoso que lo permite. A su vez, la fuerza aérea lleva a cabo constantes sobrevuelos en Magdalena y la Guajira, mientras que la policía de carreteras ejerce controles en el corredor vial.

En suma, la actuación de las Fuerzas Armadas y el Gobierno se ha ido aumentando, como una forma de ofrecer mayor seguridad a la población civil, controlar la actividad ilegal en la Troncal Caribe. En este sentido: “las autoridades han intensificado tanto los controles viales, con

la intervención de la Policía de Carreteras y el Ejército, y se les ha sumado el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes realizan a diario sobrevuelos en la zona” (Fuerza aérea colombiana, 2019).

Este modo de vigilancia permite observar zonas estratégicas de difícil acceso terrestre y optan por el aumento del número de tropas en los municipios más afectados, lo que no siempre es bien recibido por los habitantes del territorio que tienen la idea que la presencia de la fuerza pública incrementa la inseguridad y aumenta el conflicto.

## **CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO EN EL BAJO CAUCA, NORDESTE ANTIOQUEÑO Y SUR DE BOLÍVAR.**

Luego de la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc-EP y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en la región del Nordeste Antioqueño, sur de Bolívar y Bajo Cauca, la violencia se ha reactivado porque distintos grupos armados han entrado en disputa por los territorios que las extintas Farc-EP que controlaban la región. La confrontación armada directa tiene como fin de tener control del centro del país, la cual es un punto estratégico para diferentes actividades al margen de la ley, debido a su ubicación y características geográficas, sociales, culturales y económicas.

**El Bajo Cauca** es una subregión que conecta el interior del país con la costa caribe colombiana, de manera que por el oriente el límite es el departamento de Bolívar; al nororiente y al occidente esta Córdoba; al norte colindan las serranías de Ayapel y de San Lucas, que se ubican sobre la cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí. A su vez, el Bajo Cauca se compone de seis municipios: Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, Tarazá y Zaragoza, todos con presencia de grupos armados ilegales en confrontación y disputa permanente por los recursos existente en el territorio y por los corredores de criminalidad.

Por su parte el **Nordeste antioqueño** está al margen de la cordillera Central, colinda al sureste con la serranía de San Lucas y entre los ríos Porce, Nechí, Nus y Alicante; limita con el Bajo Cauca, Magdalena Medio, el departamento de Bolívar y contiene diez municipios: San Roque, Santo Domingo, Vegachí, Amalfi, Anorí, Cisneros, Yalí, Yolombó, Remedios y Segovia y sus poblaciones están agobiadas por la violencia de los grupos armados ilegales.

El **sur de Bolívar** limita al sur y al oeste con Antioquia, Córdoba, Sucre y el mar Caribe, los municipios en esta región son Santa Rosa del Sur, Tiquisio, Achí, San Pablo, Cantagallo, Simití, Río Viejo, Morales, Regidor, Arenal, Montecristo y Norosí; además se enmarca entre el río Cauca y el río Magdalena, con una vasta extensión montañosa que contiene riquezas minerales muy importantes especialmente reservas de oro.

### ***Conflicto armado y paz en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño***

Desde el año 2018 hasta el 2020 los índices de violencia en la región del **Bajo Cauca Antioqueño** han aumentado y, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño registran para junio un total de 151.1356 víctimas. Este dato no es algo menor, pues representa cerca del 35 % de la población total de la región. Y en el mismo informe de la Unidad de Víctimas, los seis municipios que conforman esta subregión (Cáceres, Tarazá, El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí) sumaron 203.318 víctimas hasta octubre del mismo año.

Al tratar de particularizar los niveles de violencia, el informe del Registro Único de Víctimas (RUV), proporciona los siguientes datos: 290.472 personas están inscritas y hacen referencia a casos de desplazamiento forzado; a su vez, los homicidios se calculan en 29.629; están amenazadas unas 28.183

personas y se calculan unos 6.772 casos de desaparición forzada.

El Bajo Cauca se ha caracterizado por la ilegalidad, la dispersión y una débil presencia del Estado, generando poco control social y político, elemento común para Antioquia y el sur de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre; esta situación ha sido aprovechada por los grupos guerrilleros que, desde hace muchos años, hacen presencia en esta región, y a estos se han añadido más recientemente los grupos de autodefensa, de bandas criminales, delincuencia común y disidencias de las extintas Farc-EP.

Todos estos aspectos, son una forma de reactivación del conflicto armado y coincide con una escalada de victimización sobre la población civil por parte de estos grupos al margen de la ley, especialmente dirigidos hacia líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc-EP, quienes firmaron el acuerdo. De otro lado, el Gobierno trata de disminuir los cultivos de coca y diezmar la expansión de nuevos actores armados.

El Bajo Cauca ha sido caracterizado como una zona donde la ilegalidad está a la orden del día, donde existe poco o nada control por parte de los entes del Estado, esta misma situación se presenta de manera frecuente en el Nordeste Antioqueño y sur de Bolívar, elemento fundamental para fortalecer a los diferentes grupos armados en esta región, los cuales están amparados por las condiciones geográficas que perpetúan múltiples delitos y se asocian, en su mayoría, con las actividades del narcotráfico.

De otro lado, esta zona hace parte de una vía que acapara desde el Catatumbo hasta el Urabá antioqueño, manteniendo en su recorrido parte del sur del Cesar, sur de Bolívar, Magdalena Medio, Nordeste antioqueño, Norte y Bajo Cauca. En estos territorios se asentaron las extintas Farc-EP, el ELN, grupos de autodefensas como AUC en su momento y, además, las bandas criminales también hacen presencia en esta zona.

Con la firma del acuerdo de paz y la reconfiguración de los grupos armados en el territorio se generó la expansión de las estructuras del ELN, la presencia de las disidencias de las Farc y la presencia cada vez mayor de las actividades criminales del Clan del Golfo, la región vio escalar el conflicto.

La población con menos privilegios entre los que se destacan campesinos, grupos afrocolombianos, indígenas y demás pobladores, quedaron en medio del conflicto y esto generó desplazamiento, apropiación ilegal de territorios, asesinatos, amenazas a líderes sociales y un sin número de crímenes atribuidos todos a los grupos armados de la región.

En el marco del posacuerdo se incrementaron las masacres y entre el año 2016 y el 2020 se registraron alrededor de 30 masacres, donde más de la mitad ocurrieron en el bajo Cauca; en el año 2021 se registran nuevas masacres en la zona, las cuales se asociaron a Los Caparros y el Clan del Golfo por la disputa del control del territorio, las rutas del narcotráfico y las rentas derivadas de las economías de la cocaína y del oro.

El Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño y sur de Bolívar se han caracterizado, en los últimos años, por ser un punto clave para la ilegalidad y el aumento de grupos al margen de la ley, los cuales se han beneficiado del narcotráfico para mantener su influencia en la región. El sur de Bolívar, desde la década de los años 70 convive con la guerrilla del ELN, la cual creó diferentes frentes en esta región, algunos de ellos son: José Solano Sepúlveda, Mártires y Héroes y Alfredo Gómez Quiñones. Esta guerrilla se involucró en todos los quehaceres sociales y económicos de la zona y luego vio en el narcotráfico y la minería ilegal una buena fuente de lucro para respaldar el proceso revolucionario.

Más adelante, la guerrilla de las Farc-EP hizo presencia en el Magdalena Medio y, para los años 90, su capacidad militar aumentó, gracias a lo cual sacó grandes beneficios de la minería ilegal y del negocio del narcotráfico.

Es importante señalar que bajo estas dinámicas también entraron en escena los grupos paramilitares y, a finales de la década de los años 90, con la llegada del Bloque Central Bolívar de las AUC, este nuevo actor ingresa para disputar los territorios a las dos guerrillas antes mencionadas.

Es así que, según el informe de *Las Rutas del Conflicto*, la mayor disputa se dio por los municipios de San Pablo, Santa Rosa, Cantagallo, Río Viejo, Simití, Montecristo, Morales y Altos del Rosario. Ese año, líderes de la región se movilizaron masivamente en contra de toda la violencia que se había desatado por la incursión paramilitar y el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos firmados en pasadas movilizaciones.

En el sur de Bolívar la situación es compleja, pues a pesar de los esfuerzos de las comunidades que ven con esperanza la implementación del Acuerdo, la inestabilidad de la zona por parte del Estado ha postergado la paz en la región, de manera que en El Sur del Bolívar perdura el conflicto armado, dejando a su paso desplazamientos masivos, violaciones a los derechos humanos, asesinatos y varias amenazas contra los líderes sociales:

Desde inicios de 2019 la violencia en el Sur del Bolívar se ha recrudecido. Uno de los acontecimientos que marcó la crisis social que se vive en esta región se presentó en marzo de 2021 cuando más de 200 habitantes de las veredas Canónico del municipio de Montecristo y La Garita en Río Viejo, tuvieron que salir huyendo a causa de los constantes enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo Familias campesinas y migrantes buscaron refugio en el municipio de Norosí (Las Rutas del Conflicto, 2021).

En estas regiones, a pesar de los acuerdos, la violencia persiste y, aunque las Farc-EP se hayan desmovilizado, otros grupos tomaron como suyo el territorio que estas dejaron, lo cual ha conllevado a una serie

de disputas entre grupos al margen de la ley como el ELN, El Clan del Golfo y las llamadas disidencias de las Farc, de manera que el accionar de los grupos armados, relacionado principalmente con la disputa por diferentes rentas legales e ilegales, y por el control territorial, ha desembocado en una crisis humanitaria alimentada por el aumento del desplazamiento forzado, los asesinatos y las prácticas de control social.

En general, en toda la región se ha reactivado la violencia partir de la firma del Acuerdo de Paz, este es el caso del Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño y sur de Bolívar, donde grupos como Los Caparros, el Clan del Golfo, el ELN y el Frente 36 de las disidencias de las Farc, que tienen una fuerte influencia en esta región, se disputan el control del territorio, los cultivos de coca, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal.

Un gran daño ambiental se da también en la región, debido a la explotación de la minería ilegal, que produce un daño enorme a los ecosistemas, ya que el uso del mercurio en grandes cantidades cae en las fuentes de agua, ocasionado muerte y desaparición de las especies acuáticas, además, las fuentes de agua se vuelven poco apropiadas para el tratamiento y potabilidad del recurso en la región.

A esto se suma el hecho de que con el aumento del precio del oro a nivel global y según un estudio realizado por la Universidad de los Andes, hay un incremento en las disputas por el territorio de los grupos al margen de la ley que están presentes en el centro del país:

El incremento en la rentabilidad de la explotación de oro y a su vez, el incremento en su explotación ilegal, explicarían también el interés de los grupos armados ilegales en esta actividad en los últimos años, lo que según los resultados del estudio, ha generado disputas por el control territorial de las zonas de explotación minera e incrementado los índices de homicidios y masacres (Mejía, 2013).

En general, las regiones del bajo Cauca Antioqueño, el sur de Bolívar y el Nordeste antioqueño atraviesan por una difícil situación, generada por el desarrollo de las economías del narcotráfico y la minería ilegal, en medio de un conflicto armado de fuegos cruzados al centro, donde está la población civil con un precario e insuficiente acompañamiento institucional y de fuerza pública.

## CONCLUSIONES GENERALES

No es equivocado señalar que, a partir de la firma del acuerdo de paz en el año 2016, durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se inicia un nuevo ciclo de violencia con reacomodamiento de fuerzas ilegales y grupos armados interesados en poder controlar territorios y poblaciones, además de desarrollar en ellos un amplio portafolio de criminalidad, el cual afecta profundamente el desarrollo social, económico y político de los territorios y la tranquilidad y seguridad de las poblaciones.

Pero, tal vez, el mayor problema se origina debido a la actitud del Gobierno del presidente Iván Duque Márquez y su esfuerzo por desmontar el acuerdo de paz, a través de una estrategia de simulación de implementación sin resultados visibles y un retorno a la vieja práctica de la seguridad estatal que involucra, de manera criminal, a la fuerza pública en el control de los territorios, afectando con su accionar a las poblaciones.

A esta política equivocada se suma la incapacidad del Estado de dar cobertura, en materia de presencia estatal con seguridad y derechos, a los territorios dejados por las Farc-EP y que entran en disputa y ocupación por otros actores armados. Así las cosas, la irrupción de unas disidencias fragmentadas y despolitizadas con un fuerte componente delincencial, otras buscando recomponer las luchas en los territorios con incidencia en poblaciones, unidas a la resurgencia de las Farc, Segunda Marquetalia, resultado del incumplimiento de los acuerdos y de una estrategia de entrampamientos judiciales para extraditar algunos de sus comandantes

genera una guerra entre viejos y retornados militantes de la organización.

La presencia del ELN en los territorios con su estrategia de guerra de resistencia y su influencia en las actividades de la población y en el control de las administraciones públicas, como en el desarrollo de las actividades de su economía de guerra, generan una situación de incertidumbre y violencia con fuegos cruzados entre todos los grupos armados, a los que se suman las bandas criminales del narcotráfico y el paramilitarismo, entre ellas el Clan de Golfo.

En las regiones estudiadas, el conflicto armado, durante décadas, ha tenido como víctima principal a la población civil; se ha desarrollado en medio de ella y ha buscado, en lo esencial, controlar a la población como la manera de tener poder sobre el territorio y las actividades que se desarrollan en él. Conforme se fue dando la agudización del conflicto armado, la guerra fue afectando cada vez más la población y los territorios y sus consecuencias no acaban cuando se frenan los picos de la violencia o cuando los hechos dejan de ser noticia.

Estas consecuencias tienen un impacto más allá y llegan hasta hoy. Esta es una guerra en la que las víctimas civiles han sufrido de manera simultánea múltiples violaciones de derechos humanos, marcando sus vidas y las de sus familias y comunidades. Los actores del conflicto armado en estas regiones han cometido múltiples y reiteradas violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. Sus víctimas han sido –y siguen siendo– personas vinculadas a organizaciones y procesos sociales, pero las principales víctimas del conflicto armado en Colombia son civiles del común, las personas de a pie.

La mayoría de estas víctimas han sido aquellas que, además de ser las afectadas son quienes, sobreviviendo en medio de la pobreza y la miseria en territorios atravesados por múltiples violencias y carencias, han sufrido también las consecuencias del conflicto armado, la violencia y la criminalidad.

Las numerosas violaciones de derechos humanos e infracciones del DIH, que se han dado en el conflicto armado, muestran la intencionalidad de las violencias y el tipo de ataques sufridos por la población civil. Las violaciones e infracciones abordadas son: homicidios (masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos) y atentados al derecho a la vida; desaparición forzada, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, amenazas, reclutamiento de niños, niñas y adolescente, trabajo forzoso, extorsión, ataques indiscriminados, ataques a bienes protegidos, desplazamiento forzado, confinamiento, despojo y pillaje, entre otras prácticas de criminalidad y violencia contra la población. Muchas de estas acciones se dieron de manera conjunta, a veces en distintos momentos de la vida, y marcaron las biografías y la historia de familias y comunidades.

La ausencia del Estado, a través de la fuerza pública y las políticas claras de bienes y desarrollo, quien era el encargado de ocupar los espacios dejados por las Farc y no lo hizo, ha contribuido a la persistencia del conflicto armado y ha limitado la capacidad de las comunidades para acceder al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. La falta de seguridad ha afectado las economías locales, especialmente la agricultura y el turismo, lo que ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico de estas regiones y una afectación mayor en los niveles de desempleo y pobreza.

El conflicto armado ha generado una cultura de violencia y de la impunidad, lo que ha dificultado el proceso de construcción de paz en estas zonas, a ello se suma el retorno recurrente de la violencia como fenómeno endémico en las distintas regiones del país,

lo cual ha tenido un impacto negativo en la población civil y una transformación marcada de la naturaleza del conflicto en una degradación que agota cada vez la salida política e institucional negociada.

Tal vez el logro más significativo que podría alcanzarse en lo que resta del actual Gobierno, en materia de Paz Total, es retomar el acuerdo de paz firmado en el año 2016 y llevarlo lo más lejos posible en materia de ejecuciones, acompañado de una robusta y vigorosa política de seguridad y defensa, que opere en los marcos del orden constitucional y legal y, que se coloque del lado de las poblaciones y la protección de los territorios. De esta manera la implementación efectiva del acuerdo de paz del año 2016 requerirá de una estrategia de seguridad integral que involucre a todas las instituciones estatales y una política pública que incluya el enfoque de género y la protección de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan las distintas regiones del país.

Otro aspecto esencia a tomar en consideración es la construcción de una cultura de la convivencia, que convoque la participación de las comunidades en la construcción de paz y en la implementación de políticas públicas, las cuales son fundamentales para garantizar una solución duradera al conflicto armado, en la recuperación de la legitimidad del Estado, desgastada por los gobiernos anteriores. La resolución definitiva del conflicto requerirá entonces un esfuerzo conjunto de las autoridades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y los actores armados que tengan voluntad política para abordar las causas subyacentes del conflicto y trabajar hacia una solución sostenible y duradera.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### **Región del Catatumbo y la Orinoquía: Santander, Casanare, Arauca**

- » Castillo, C. V. (2019, 12 noviembre). Número de disidentes de las Farc y guerrilleros del ELN aumentó. La FM. Recuperado 15 de abril de 2023. <https://www.lafm.com.co/colombia/numero-de-disidentes-de-las-farc-y-guerrilleros-del-eln-aumento>
- » Chato, P. (2017, 7 febrero). Gobierno y ELN: el difícil reto de confiar en el otro - Colombia Plural. En: *Colombia Plural*.
- » Colombia, P. (2021) [Especial] Las rutas de la Marcha por la Dignidad. En: *Colombia Informa*.
- » Contagioradio. (2022). Pobreza y desempleo, causas de la guerra en Arauca. En: *Contagio Radio*. <https://www.contagioradio.com/pobreza-desempleo-arauca-causas-guerra/#:~:text=El%20Espectador%20Seg%C3%BAn%20el%20DANE%2C%20el%20IPM%2C%20%C3%8Dndice,Villa%20Espinosa%20para%20un%20medio%20de%20circulaci%C3%B3n%20nacional>
- » Crime, I. (2022). El futuro incierto de la Segunda Marquetalia. En: *InSight Crime*. <https://es.insightcrime.org/noticias/futuro-incierto-segunda-marquetalia/>
- » Crime, I. (2023). Estado Mayor Central - Ex-Farc Mafia. En: *InSight Crime*. <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-venezuela/ex-farc-mafia-estado-mayor-central/>
- » Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (2018) Pueblos Indígenas: Grupos étnicos - Información técnica [Conjunto de datos]. En: Censo Nacional de Población y Vivienda. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-eticos/informacion-tecnica>
- » Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (2022). Integración de la población venezolana en Colombia: [Conjunto de datos]. En: *Estudios Poscensales*. Fondo de Población de las Naciones Unidas. <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/estudios-poscensales/14-Integracion-poblacion-venezolana-Colombia.pdf>
- » Fundación Ideas para la Paz (2015, abril). El ABC del Ejército de Liberación Nacional. En: *FIP*. <https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2015-04/el-abc-del-ejercito-de-liberacion-nacional>
- » Gaviria, R. M. (2019, 2 julio). Así se gestó la alianza entre las disidencias de las Farc | En: *El Colombiano*: [www.elcolombiano.com](http://www.elcolombiano.com). <https://www.elcolombiano.com/colombia/plan-de-disidencias-para-refundar-a-las-farc-probado-por-comunicaciones-interceptadas-NH11076856>
- » Gobernación de Arauca (2015, mayo). Población Afrocolombiana en el Departamento. Arauca. Recuperado 18 de abril de 2023. <http://arauca.gov.co/?id=57&vn=1&categoria=Aspectos%20Demogr%E1ficos&vercategoria=1&diarias=>
- » González, F. E. (2021, 20 mayo). Una mirada estructural para entender al Eln: un federalismo insurgente. En: *ELESPECTADOR.COM*. <https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/una-mirada-estructural-para-entender-al-eln-un-federalismo-insurgente-article/>
- » Gutiérrez Lemus, O. J. (2010). Arauca: espacio, conflicto e institucionalidad. En:

*Análisis Político*, 23 (69), 3-34.

- » Gutiérrez, O. (2023). ¿Qué está pasando en Arauca? Fundación Pares: Paz y Reconciliación. <https://www.pares.com.co/post/qu%C3%A9-est%C3%A1-pasando-en-arauca>
- » Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz [Indepaz] (2021) Balance sobre las dinámicas del Ejército de Liberación Nacional –ELN– en Colombia. En: *Observatorio de conflictividades y DDHH*. <https://es.insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/04/INFORME-ELN-2020-corregido-L-cgp.pdf>
- » Larratt-Smith, C. (2021). El ELN en Arauca: el fortín guerrillero en la sombra de los Andes. En: *¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020*. Andrés F. Aponte González y Fernán E. González González, (pp. 259-330). Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz.
- » León, A. (2021, 6 abril). En Arauca temen una guerra entre el ELN y las disidencias. En: *La Silla Vacía*. <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/en-arauca-temen-una-guerra-entre-el-eln-y-las-disidencias/>
- » Ministerio de Defensa Nacional (2023). Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana: Garantías para la vida y la paz. 2022-2026. Recuperado 18 de abril de 2023. [https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Recursos%20MDN/Plantillas%20Documentos/Ministerio/CentroDocumentos/PolíticasSectoriales/PolíticaDefensaSeguridad/Recursos/PDS\\_2023\\_web.pdf](https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Recursos%20MDN/Plantillas%20Documentos/Ministerio/CentroDocumentos/PolíticasSectoriales/PolíticaDefensaSeguridad/Recursos/PDS_2023_web.pdf)
- » Prensa Colombia (2021). Mapa de masacres: Las rutas de la Marcha por la Dignidad. En: *Colombia Informa*. <http://www.colombiainforma.info/especial-las-rutas-de-la-marcha-por-la-dignidad/>
- » Rutas del Conflicto (2022). *Factores de persistencia*. <https://rutasdelconflicto.com/especiales/arauca/factores-persistencia.html>
- » Rutas del Conflicto (2023) Arauca: un nuevo ciclo de violencia con más actores en medio de los problemas de frontera. En: *Colombia Informa*. <https://rutasdelconflicto.com/especiales/arauca/actualidad.html>
- » Saumeth Cadavid, E. (2015) Historia de la Guerrilla en Colombia [Reseña histórica]. Universidad Federal de Juiz de Fora.
- » Verdad Abierta (2022). Un singular pacto de paz Eln-Farc. En: *VerdadAbierta.com*. <https://verdadabierta.com/un-singular-pacto-de-paz-eln-farc/>

### **La región del Chocó: Córdoba y el Urabá Antioqueño**

- » Análisis Urbano (26 de junio de 2014). Guerra fría al interior del ‘Pacto del fusil’ (Primera parte). Recuperado el 29 de abril de 2023. <https://analisisurbano.org/guerra-fria-al-interior-del-pacto-del-fusil/12165/>
- » Análisis Urbano (28 de septiembre de 2017). Se ajusta el pacto del fusil. Recuperado el 29 de abril de 2023. <https://analisisurbano.org/se-ajusta-el-pacto-del-fusil/20072/>
- » Análisis Urbano (28 de agosto de 2017). Se ajusta el pacto del fusil. Medellín, Colombia. Recuperado el 29 de abril de 2023. <https://analisisurbano.org/se-ajusta-el-pacto-del-fusil/20072/>
- » Análisis Urbano (7 de julio de 2022). ¡Antioquia arde! Estos son los grupos ilegales que atizan el fuego cruzado de la violencia narcotraficante. Colombia.

Recuperado el 26 de abril de 2023. <https:// analisisurbano.org/antioquia-arde-estos-son-los-grupos-ilegales-que-atizan-el-fuego-cruzado-de-la-violencia-narcotraficante/223530/>

» Análisis Urbano (7 de julio de 2022). Otro Gobierno Nacional que se va sin prestarle atención al crimen paramafioso de Medellín. Medellín, Colombia. Recuperado el 10 de abril de 2023. <https:// analisisurbano.org/otro-gobierno-nacional-que-se-va-sin-prestarle-atencion-al-crimen-paramafioso-de-medellin/223541/>

» Briefing humanitario Córdoba enero-julio (enero- julio de 2021). Córdoba, Colombia. [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/briefing\\_humanitario\\_cordoba\\_enero-julio\\_2021\\_vf\\_1.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/briefing_humanitario_cordoba_enero-julio_2021_vf_1.pdf)

» Cámara de Comercio (2021). Perfil Socioeconómico de Urabá 2021. Recuperado el 20 de abril de 2023.

» Cámara de Comercio (noviembre de 2021). Perfil Socioeconómico del Valle de Aburra 2021. Valle de aburra, Colombia. Recuperado el 23 de abril de 2023. <https://www.camaramedellin.com.co/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=569&articleid=1309&documentid=1029>

» Cámara de Comercio de Urabá (2020) Informe socio-económico 2020 Urabá. Recuperado el 29 de abril de 2023. <https://ccuraba.org.co/site/wp-content/uploads/2021/01/INFORME-SOCIO-ECONOMICO-2020.pdf>

» Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (2023). Medellín. Recuperado el 20 de abril de 2023. <https://www.cideu.org/miembro/medellin/#:~:text=Medell%C3%ADn%20aporta%20m%C3%A1s%20de%207,centro%20de%20servicios%20y%20comercio.>

» Colombia Sostenible (21 de marzo de 2021). Estructuramos tres proyectos sostenibles en el Urabá Antioqueño. Recuperado el 29 de abril de 2023. <https://colombiasostenible.gov.co/node/325>

» DANE (2018). ¿Cuántos somos? Recuperado el 20 de abril de 2023.

» Dávila, L. F. (14 de abril de 2016). Violencia urbana, conflicto y crimen en Medellín: una revisión de las publicaciones académicas al respecto. Recuperado el 29 de abril de 2023. <http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v58n2/v58n2a03.pdf>

» El Colombiano (25 de noviembre de 2022). 2022, el año con más hurtos en una década. Colombia. Recuperado el 26 de abril de 2023. <https://www.elcolombiano.com/antioquia/ano-con-mas-hurto-en-una-decada-en-medellin-PN19364029>

» El Espectador (5 de septiembre de 2017). "Otoniel", máximo líder del clan del Golfo, quiere someterse a la justicia. Recuperado el 29 de abril de 2023. <https://www.elespectador.com/judicial/otoniel-maximo-lider-del-clan-del-golfo-quiere-someterse-a-la-justicia-article-711657/>

» El Espectador (16 de marzo de 2021). Nueve organizaciones denuncian sistematicidad en asesinatos de líderes sociales. Urabá, Colombia. Recuperado el 27 de abril de 2022.

» El Tiempo (21 de octubre de 2021). 'Agamenón' se puso en marcha en febrero de 2015. Policía ha ocupado bienes por 10 billones de pesos. Recuperado el 30 de abril de 2023. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/agamenon-asi-fue-la-operacion-tras-los-capos-del-clan-del-golfo-629043>

- » Indepaz (23 de noviembre de 2016). Informe de riesgo de 037-16.
- » Infobae (7 de julio de 2022). El aporte de Antioquia al PIB del país en 2021 fue de 15,22 %, la cifra más alta de los últimos 30 años. Antioquia, Colombia. Recuperado el 16 de abril de 2023. <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/07/el-aporte-de-antioquia-al-pib-del-pais-en-2021-fue-de-1522-la-cifra-mas-alta-de-los-ultimos-30-anos/>
- » Insight Crime (7 de octubre de 2019). Frente 18 de ex-Farc mafia respalda propuesta de volver a la guerra en Colombia. Recuperado el 29 de abril de 2023. <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/disidentes-respaldan-guerra-farc-colombia/>
- » Insight Crime (24 de noviembre de 2022). Cómo explota el crimen organizado el flujo de migrantes por el Tapón del Darién en Colombia. Recuperado el 27 de abril de 2023. <https://es.insightcrime.org/noticias/crimen-organizado-explota-flujo-migrantes-tapon-darien-en-colombia/>
- » Insight Crime (3 de marzo de 2023). Asesinato de líder gaitanista refleja divisiones internas frente a la Paz Total en Colombia. Colombia. Recuperado el 29 de abril de 2023. <https://es.insightcrime.org/noticias/asesinato-lider-gaitanista-refleja-divisiones-paz-total-colombia/>
- » La Razón (2021). Córdoba entre los departamentos más afectados por desplazamiento masivo en 2021. Recuperado el 2023. <https://larazon.co/cordoba/cordoba-entre-los-departamentos-mas-afectados-por-desplazamiento-masivo-en-2021/>
- » La Reforma (15 de febrero de 2023). Intensificarán Colombia y Panamá operaciones en Darién. Recuperado el 30 de abril de 2023. [https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?\\_rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/intensificaran-colombia-y-panama-operaciones-en-darien/ar2553477?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a-7279703b767a783a--](https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/intensificaran-colombia-y-panama-operaciones-en-darien/ar2553477?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a-7279703b767a783a--)
- » Ministerio de defensa (21 de Julio de 2021). Décima Séptima Brigada. Recuperado el 29 de abril de 2023. <https://www.ejercito.mil.co/decima-septima-brigada/>
- » MinTIC (febrero de 2016). Plan de Desarrollo Turístico Departamento del Chocó 2016-2020. Chocó. Recuperado el 30 de abril de 2023. <https://www.mincit.gov.co/getattachment/74c324b4-519f-41af-9987-c73bceec8061/Choco-1.aspx>
- » Radio Nacional (27 de septiembre de 2022). Más de 62 mil personas en el Chocó han sido víctimas de confinamiento en 2022: OCHA. Recuperado el 28 de abril de 2023. <https://www.radionacional.co/noticias-colombia/confinamiento-en-choco-62-mil-victimas-en-2022>
- » Revista Ejército (13 de octubre de 2020). Séptima División del Ejército Nacional. Recuperado el 27 de abril de 2023. [publicacionesejercito.mil.co/recurso\\_user/revista\\_ejercito/Revista\\_208/septima-division-del-ejercito-nacional.html#:~:text=La%20Séptima%20División%20desarrolla%20operaciones,sus%20más%20de%2026.000%20hombres](http://publicacionesejercito.mil.co/recurso_user/revista_ejercito/Revista_208/septima-division-del-ejercito-nacional.html#:~:text=La%20Séptima%20División%20desarrolla%20operaciones,sus%20más%20de%2026.000%20hombres)
- » Suárez, L. P. (2021). Las consecuencias de la minería ilegal en Colombia a través del análisis de datos: caso departamento de Chocó. Recuperado el 10 de febrero de 2023. <http://hdl.handle.net/10654/39362>
- » Unidad de Víctimas (31 de marzo de 2023). Víctimas conflicto armado. Colom-

bia. Recuperado el 28 de abril de 2021. <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos>

» Verdad Abierta (20 de enero de 2018). En el Alto Sinú, implementación de acuerdos con las Farc está en riesgo. Recuperado el 27 de 04 de 2023. <https://verdadabierta.com/en-el-alto-sinu-implementacion-de-acuerdos-con-las-farc-esta-en-riesgo/>

### **Suroccidente del país. Tumaco, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo**

» Albarracín, D., & Milanese, J. (2020). Violencia y órdenes políticos locales en el posacuerdo: las dinámicas territoriales en el Norte del Cauca, el Bajo Cauca Antioqueño y Tumaco. En: *Revista de Estudios Sociales*, (71), 28-41.

» Capera Figueroa, J. J. & Ñañez Rodríguez, J. J. (2017) Una perspectiva crítica sobre la violencia en Colombia en épocas del postconflicto. En: *Revista Criminalidad*, 59(2), 145-155.

» DANE (2018). Índice de Pobreza Multidimensional - IPM. Resultados Valle del Cauca 2018. [[https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones\\_vida/pobreza/2019/Presentacion\\_rueda\\_de\\_prensa\\_ECV\\_e\\_IPM\\_2019.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Presentacion_rueda_de_prensa_ECV_e_IPM_2019.pdf)]

» DANE (2019). Índice de Pobreza Multidimensional - IPM Resultados Cauca 2019. [[https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones\\_vida/pobreza/2019/Presentacion\\_rueda\\_de\\_prensa\\_ECV\\_e\\_IPM\\_2019.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Presentacion_rueda_de_prensa_ECV_e_IPM_2019.pdf)]

» DANE (2019). Índice de Pobreza Multidimensional - IPM. Resultados Tumaco 2019. [[https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones\\_vida/pobreza/2019/Boletin\\_Region\\_bt\\_pobreza\\_multidimensional\\_19\\_amazonia-orinoquia.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin_Region_bt_pobreza_multidimensional_19_amazonia-orinoquia.pdf)]

» DANE (2019). Índice de Pobreza Multidimensional - IPM. Resultados Putumayo 2019. [[https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones\\_vida/pobreza/2019/Boletin\\_Region\\_bt\\_pobreza\\_multidimensional\\_19\\_amazonia-orinoquia.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin_Region_bt_pobreza_multidimensional_19_amazonia-orinoquia.pdf)]

» Datos.gov.co (2023). Homicidio | Datos abiertos Colombia (2023, 23 octubre). <https://www.datos.gov.co/Seguridad-y-Defensa/HOMICIDIO/m8fd-ahd9>

» Datos.gov.co (2023). Secuestro | Datos abiertos Colombia (2023, 23 octubre). <https://www.datos.gov.co/Seguridad-y-Defensa/SECUESTRO/d7zw-hpf4>

» Datos.gov.co (2023). Reporte delito terrorismo Policía Nacional | Datos Abiertos Colombia. (2023b, agosto 28). <https://www.datos.gov.co/Seguridad-y-Defensa/Reporte-Delito-Terrorismo-Polic-a-Nacional/37p5-impc>

» Datos.gov.co (2022). Violencia sexual e intrafamiliar (TASaS) Datos abiertos Colombia. (2022, 10 junio). <https://www.datos.gov.co/dataset/Violencia-sexual-e-intrafamiliar-Tasas-/icuu-8acd>

» Datos.gov.co (2022). Sistema de Información de Eventos de Violencia del Conflicto Armado SIEVCAC - Víctimas AS Asesinatos selectivos | Datos Abiertos Colombia. (2022, 14 julio). <https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Sistema-de-Informaci-n-de-Eventos-de-Violencia-del/djr9-7s3i>

» Duarte, C. (2013). Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca. Pontificia Universidad Javeriana Cali-Centro de Estudios Interculturales-Incoder. Cali.

» Fisas, V. (2010). El proceso de paz en Colombia.

- » García Duarte, R., Wilches Tinjacá, J. A., Guerrero Sierra, H. F., & Hernández Pérez, M. (Eds.). (2021). Paz en crisis: En: *Territorializar la crisis* (Tomo II). Colombia: Universidad del Rosario.
- » Insuasty Rodríguez, A. & Borja Bedoya, E. (2016). El papel de la comunidad universitaria en el pos-acuerdo o pos-conflicto en Colombia. En: *Revista Científica de Administración*, Vol. 4, No. 7, pp. 49-60.
- » Indepaz (2021). Masacres en Colombia 2020: el estallido de la barbarie. Bogotá. Indepaz.
- » Indepaz (2021). Sistematización de agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos en Colombia en 2020. Bogotá. Indepaz.
- » Indepaz (2021). Sistematización de las violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional en Colombia. Bogotá. Indepaz.
- » Indepaz (2021). Sistematización de agresiones a la protesta social en Colombia. Bogotá. Indepaz.
- » Jurisdicción Especial para la Paz (2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. <https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx>
- » Moreno Mercado, J. M. (2020). Encuadres, violencia y postconflicto en Colombia: una revisión del tratamiento del ELN desde los Acuerdos de Paz. En: *Reflexión Política* 22(44), pp. 111-119. doi: 10.29375/01240781.3837
- » Narváez Jaimes, G. E. & Castiblanco Durán, C. A. (Eds.). (2021). *Sociología de la paz en Colombia: Balance territorial del posacuerdo final*. Prólogo de Eduardo Pizarro Leongómez.
- » Vargas Velásquez, A. & Facio Lince Betancourt, L.P. (2020, 9 de octubre). Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una amenaza latente en Colombia [Artículo]. Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 5 de mayo de 2023. <https://periodico.unal.edu.co/articulos/autodefensas-gaitanistas-de-colombia-una-amenaza-latente-en-colombia/>

### **La violencia en los departamentos de la Costa Atlántica**

- » Barney, J (2021). La falta de respuestas del Estado colombiano a los niños wayúu de La Guajira. [<https://iwgia.org/es/noticias/4526-la-falta-de-respuestas-del-estado-colombiano-a-los-ni%C3%B1os-way%C3%BAu-de-la-guajira.html#:~:text=Mientras%20un%2039%2C7%25%20de,siguen%20muriedo%20por%20causas%20evitables>]
- » DANE (2021) Pobreza monetaria y grupos de ingreso en Colombia. [[https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones\\_vida/pobreza/2021/Pre-sentacion-pobreza-monetaria\\_2021.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/Pre-sentacion-pobreza-monetaria_2021.pdf)]
- » Defensoría del Pueblo (2018). Alerta temprana N° 061- 18. [<http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/02/AT-N%C2%B0-061-18-SUC-San-Onofre.pdf>]
- » Díaz, R., Barrios, D., & Rojas, K. (2022). Informe económico anual de la jurisdicción. [<https://www.ccsm.org.co/servicios-y-programas/programas-empresariales/estudios-economicos/investigaciones-e-indicadores-economicos/send/78-investigaciones/51953-informe-anual-jurisdiccion2022.html#:~:text=El%20territorio%20de%20Magdalena%20seg%C3%BAAn,49%2C9%25%20a%20hombr-es.>]

- » El Espectador (2021). Seis municipios de Magdalena y Cesar bajo la zozobra de grupos armados. [<https://www.elespectador.com/judicial/seis-municipios-de-magdalena-y-cesar-bajo-la-zozobra-de-grupos-armados/>]
- » El Espectador (2023). Amplían área protegida de Sierra Nevada de Santa Marta: tendrá más de 550 hectáreas. [<https://www.elespectador.com/ambiente/el-pnn-sierra-nevada-es-el-area-protegida-mas-grande-del-caribe/>]
- » El Heraldó (2020). ELN afianza presencia en zona de frontera en La Guajira y Cesar. [<https://www.elheraldo.co/region-caribe/eln-afianza-presencia-en-zona-de-frontera-en-la-guajira-y-cesar-700617>]
- » El Heraldó (2021). Las ‘narco-estrategias’ del ‘Clan del Golfo’ en el Atlántico. [<https://www.elheraldo.co/judicial/radiografia-del-trafico-de-droga-del-clan-del-golfo-en-la-costa-atlantica-821372>]
- » Ferrari, E. & Trujillo, A. (2019). La violencia post acuerdo: un análisis comparado entre El Salvador y Colombia. [<https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/f6982e69-853b-4818-ba80-97a6217fb260/content>]
- » FIP (2017). Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición. [<https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2017-07/crimen-organizado-y-saboteadores-armados-en-tiempos-de-transicion-radiografia-necesaria>]
- » FIP (2013). Dinámicas del conflicto armado en la Guajira y su impacto humanitario. [[https://storage.ideaspaz.org/documents/DocumentoMonitoreo\\_ConflictoArmado\\_Guajira\\_Mayo2013-REVISA9DO.pdf](https://storage.ideaspaz.org/documents/DocumentoMonitoreo_ConflictoArmado_Guajira_Mayo2013-REVISA9DO.pdf)]
- » Fuerza Aérea Colombiana (2019). Por cielo y tierra garantizan la seguridad en el troncal caribe. [<https://www.fac.mil.co/es/noticias/por-cielo-y-tierra-garantizan-la-seguridad-en-la-troncal-del-caribe>]
- » Gobernación del Cesar (s.f). Departamento del Cesar. [<https://cesar.gov.co/d/index.php/es/nosotros/mainmeneldpto/mendeppre>]
- » Ideas de Paz (2011). Análisis regional de los Montes de María. [<https://multimedia.ideaspaz.org/media/website/MontesdeMariaweb.pdf>]
- » Indepaz (2020). Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia. [<https://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-GRUPOS-ARMADOS-2020-OCTUBRE.pdf>]
- » Indepaz (2021). Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022. [<https://indepaz.org.co/informe-sobre-presencia-de-grupos-armados-en-colombia-2021-2022-1/>]
- » Indepaz (2023). Desafío a la paz total, lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro. Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022(1). [<https://indepaz.org.co/informe-sobre-presencia-de-grupos-armados-en-colombia-2021-2022-1/>]
- » Reynell, B., & Trejos, L. (2022). En la Sierra Nevada la Guerra ya no es de baja intensidad. [<https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/en-la-sierra-nevada-la-guerra-ya-no-es-de-baja-intensidad/>]
- » Semana (2022). Preocupante: Advierten que el Clan del Golfo está monitoreando con drones la Sierra Nevada de Santa Marta. [<https://www.semana.com/nacion/barranquilla/articulo/preocupante-advierten-que-el-clan-del-golfo-esta-monitoreando-con-drones-la-sierra-nevada-de-santa-marta/202238/>]

- » Suarez, V., Mayorga, C., & Corredor, S. (2020). Liderazgos en Sucre: Una labor de bajo perfil. [<https://lapazenelterreno.com/mapas-de-riesgo/liderazgo-en-sucre/#:~:text=El%20Bloque%20Virgilio%20Peralta%20Arenas,organizaci%C3%B3n%20mexicana%20dedicada%20al%20narcotr%C3%A1fico>]
- » Tapias, J. (2017). Pobreza y violencia en la Región Caribe Colombiana: un enfoque espacial. DOI: 10.1016/j.espe.2016.12.002
- » Trejos, F, & Reynell, B. (2020). Pandemia y conflictos armados en el Caribe Colombiano. [<http://fronteraysociedad.org/wp-content/uploads/2021/01/UNCaribe-y-UniNorte.Pandemia-y-conflictos-armados-en-el-Caribe-colombiano.Informe-sobre-la-violencia-armada-en-el-2020.pdf>]
- » Trejos, F. (2020). Panorama de los grupos armados organizados en La Guajira. [<https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/panorama-de-los-grupos-armados-organizados-en-la-guajira/>]
- » Wisma, D. (2022). El Magdalena se posiciona como un departamento altamente desigual. [[https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/santa\\_marta/1651750070\\_701747.html](https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/santa_marta/1651750070_701747.html)]

### **Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar**

- » Albarracin, J., Milanese, J. P., Navarro de Arco, M., & Sinisterra Ossa, L. (septiembre, 2020). Paz y seguridad. Violencia y órdenes políticos locales en el posacuerdo: las dinámicas territoriales en El Norte del Cauca, El Bajo Cauca Antioqueño Y Tumaco. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16471.pdf>
- » Crisisgroup (s.f.). Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia. <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia>
- » El Espectador (22 de agosto de 2020). Volvió el horror: 43 masacres en Colombia en lo que va de 2020. <https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/volvio-el-horror-43-masacres-en-colombia-en-lo-que-va-de-2020-article/>
- » Indepaz (noviembre de 2020). La persistencia de conflicto armado y la crisis humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño requiere un diálogo urgente. <https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/bajo-cauca-antioqueno-dialogo-no-repeticion>
- » Medina, C. (2013). Comunidades y territorios en resistencia.
- » Mejía, D., Idrobo, N., Tribin, A. M. (2013). Minería ilegal y violencia en Colombia. En: *Ponencia presentada en el Seminario "Minería en Latinoamérica: retos y oportunidades"* Universidad de los Andes.
- » Revista Dinero (17 de febrero de 2012). Colombia aumentó en 4,3 % la producción de oro en 2011. <http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/colombia-aumento-43-produccion-oro2011/145001>
- » Rutas del conflicto (s.f.). Aquí nacimos, aquí nos quedamos. <https://rutasdelconflicto.com/especiales/conflicto-continua/sur-bolivar/violencia.html>
- » Rutas del conflicto (2021). La guerra nunca se ha ido del Bajo Cauca. <https://rutasdelconflicto.com/especiales/bajo-cauca/actualidad-region.html>
- » Rutas del conflicto (2021). La paz que no llega al Sur de Bolívar, <https://rutasdelconflicto.com/especiales/conflicto-continua/sur-bolivar/postacuerdo.html>